



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
GENERAL

E/CN.4/2001/56
18 de enero de 2001

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
57º período de sesiones
Tema 10 del programa provisional

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME): evaluación de los derechos humanos en el marco de los documentos estratégicos sobre reducción de la pobreza (DERP)

Informe presentado por el Sr. Fantu Cheru, experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales

ÍNDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
Resumen ejecutivo.....		3
Antecedentes	1 - 7	4
INTRODUCCIÓN.....	8 - 11	5
I. POR QUÉ EL REY NO TIENE VESTIDO: LA INICIATIVA DE LOS PPME Y LA CRISIS DE FINANCIACIÓN.....	12 - 20	6

ÍNDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
II. LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS SOBRE REDUCCIÓN DE LA POBREZA (DERP): UNA NUEVA FORMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL.....	21 - 35	9
A. Incongruencia de las políticas: objetivos macroeconómicos y objetivos en materia de pobreza.....	24 - 30	12
B. Participación de los ciudadanos.....	31 - 35	16
III. ÍNDICES FICTICIOS O PUEDE LA RELACIÓN DE "SOSTENIBILIDAD" DE LA DEUDA DECIRNOS HASTA QUÉ PUNTO LA SITUACIÓN DE UN PAÍS ES MALA	36 - 45	18
IV. RECOMENDACIONES: LA VÍA DEL PROGRESO	46 - 47	21

Anexos

I. Resumen de los documentos estratégicos sobre la reducción de la pobreza (DERP): Chad y Mozambique		24
II. Summary of PRSP analysis: Benin, Ghana, Kenya, Senegal, Tanzania, Uganda and Zambia*		38

* Debido a las limitaciones impuestas al número de páginas, el anexo II no pudo traducirse y, por tanto, se reproduce únicamente en inglés.

Resumen ejecutivo

Aunque el autor reconoce las buenas intenciones de la iniciativa en favor de los países pobre muy endeudados (PPME), señala que persisten una serie de problemas, el más decisivo de los cuales es su financiación. La falta de recursos suficientes para financiar esta iniciativa se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las dos instituciones que dirigen dicha iniciativa, y para los bancos de desarrollo regional y otras instituciones multilaterales menores relativamente desconocidas. Además, el autor destaca que la iniciativa no se ocupa de las deudas de estos países con los acreedores que no pertenecen al Club de París. Por tanto, la actual situación de la deuda de los PPME es peor de lo que parece y la han agravado aún más las deudas entre ellos. Por tanto, la mencionada iniciativa en su forma actual es insuficiente. En cuanto a los documentos estratégicos sobre reducción de la pobreza (DERP), el autor indica que, al prepararlos, se espera que los gobiernos indiquen claramente la relación entre la política macroeconómica y los objetivos de desarrollo social convenidos internacionalmente que han de alcanzarse para 2015. El examen de los ocho DERP que figuran en el anexo (Benin, Chad, Ghana, Kenya, Mozambique, Senegal, Tanzania y Zambia) y de un DERP que se reproduce íntegramente (Uganda) revela grandes diferencias de calidad. Además, revela que los amplios objetivos macroeconómicos de la mayoría de los países estudiados son incompatibles con los objetivos de reducción de la pobreza. Una de las razones de esta incongruencia es la contradicción entre el deseo de proporcionar rápidamente alivio de la deuda y la falta de un marco adecuado de reducción de la pobreza. Otra razón de esta incongruencia es la desigualdad de las relaciones de poder entre los países endeudados y las instituciones de Bretton Woods que gestionan la iniciativa en favor de los PPME. Dado que los países del G-7 fijan en gran medida el programa de esas instituciones, los gobiernos de esos países tienen igual culpa que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional al seguir recetando un tratamiento equivocado a los países endeudados.

El experto independiente señala también que los gobiernos participantes en la iniciativa en favor de los PPME tratan de agradar al Banco Mundial y al FMI. Por tanto, dan demasiada importancia a las consideraciones macroeconómicas, la reforma fiscal y las medidas de privatización sin pensar en los efectos de estas políticas en la reducción de la pobreza ni en el contexto en que se aplican. El autor destaca que todos los DERP examinados subrayan la necesidad de reestructurar, redimensionar, recuperar los costos y pagar menos a los maestros, y se pregunta si eso eliminará la pobreza. El autor critica que el uso de los DERP como medida de transición no tenga en cuenta la dificultad de elaborar una auténtica estrategia nacional, de reducción de la pobreza basada en el consenso, y el consentimiento de todos los interesados. Los programas apoyados por el FMI siguen siendo estrictos e inflexibles y en algunos casos sumamente punitivos, concediendo escaso margen de maniobra a los países. El Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP) (anteriormente denominado Servicio Reforzado de Ajuste Estructural, SRAE) seguirá centrándose fundamentalmente en los problemas macroeconómicos y financieros. Aunque se supone que los DERP han de ser impulsados por los países, y preparados y elaborados de manera transparente con amplia participación de la sociedad civil, el experto independiente afirma que, en la mayoría de los países examinados, no se han respetado los principios de participación y transparencia en la elaboración de tales documentos; en consecuencia, carecen de credibilidad para la población.

Sin embargo, pese a estas críticas, el experto independiente cree que los DERP son un instrumento prometedor que los países en desarrollo pueden utilizar para aplicar estrategias de

reducción de la pobreza que sean verdaderamente participatorias y controladas por el país. En este proceso el papel del Banco Mundial y del FMI puede ser importante pero dependerá de su actitud ante la condicionalidad y las reformas macroeconómicas.

Por último, el experto independiente recomienda que los gobiernos acreedores y las instituciones "reexaminen de nuevo toda la cuestión". Las restantes recomendaciones se refieren a la manera de acelerar el proceso de suministrar socorro inmediato a los países de la iniciativa en favor de los PPME que cumplan los requisitos. Sus principales recomendaciones son que la deuda de los PPME se desvincule de los DERP; que la única condición que se imponga a los países que reciben alivio de la deuda es que establezcan una entidad independiente para canalizar los recursos liberados hacia el desarrollo social; que el Banco Mundial y el FMI no sean los únicos supervisores de los programas de reducción de la pobreza sino que participen también otros organismos de las Naciones Unidas; que se organicen nuevas rondas de conversaciones para encontrar una solución a la carga de la deuda de los países más pobres; que se suprima el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza y que se emprenda un diálogo serio sobre la manera de integrar las cuestiones de política macroeconómica en los objetivos generales del desarrollo social.

Antecedentes

1. En 1999 el experto independiente, Sr. Fantu Cheru, presentó su primer informe sobre los efectos de las políticas de ajuste estructural en el goce efectivo de los derechos humanos (E/CN.4/1999/50) al Grupo de Trabajo de composición abierta sobre los programas de ajuste estructural y los derechos económicos, sociales y culturales, en su segundo período de sesiones. Posteriormente, el mismo informe se presentó a la Comisión de Derechos Humanos en su 55º período de sesiones. En ese informe el experto independiente examinó las causas de las crisis de desarrollo del Tercer Mundo, exploró la relación entre los programas de ajuste estructural y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, y recomendó medidas a nivel nacional, regional e internacional.

2. Teniendo en cuenta que la deuda externa y las políticas de ajuste estructural están relacionadas entre sí, el Relator Especial sobre las consecuencias de la deuda externa para el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales, Sr. Reinaldo Figueredo, y el experto independiente sobre las consecuencias de las políticas de ajuste estructural en el goce efectivo de los derechos humanos presentaron un informe conjunto (E/CN.4/2000/51, anexo) a la Comisión de Derechos Humanos en su 56º período de sesiones, en el año 2000. En ese informe, centraron su análisis en la iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados (PPME), la epidemia del VIH/SIDA en África, la reconstrucción en Honduras y en Nicaragua después del huracán Mitch, y la relación entre el alivio de la deuda y las peores formas de trabajo infantil. El informe terminaba con conclusiones generales y recomendaciones.

3. El presente informe se presenta con arreglo a la resolución 2000/82 de la Comisión de Derechos Humanos. En esa resolución la Comisión decidió suspender los mandatos del Relator Especial sobre las consecuencias de la deuda externa para el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales y el mandato del experto independiente sobre las políticas de ajuste estructural. En su lugar, la Comisión decidió crear el mandato del experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de ajuste estructural y de la deuda

externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales.

4. El presente informe examina las medidas que se han adoptado desde 1999 para conceder alivio de la deuda a los países que cumplían los requisitos. Partiendo de un análisis de 9 de los 19 DERP, examina de manera crítica este proceso.

5. A mediados del decenio de 1980, bajo la dirección del FMI y del Banco Mundial, se introdujeron programas de ajuste estructural con el objetivo declarado de aumentar el crecimiento y la capacidad. La liberalización de los mercados, requerida por las políticas de estabilización, frecuentemente ocasionaba demoras en el crecimiento. A fin de reducir los efectos negativos de esas demoras, el FMI introdujo en septiembre de 1987 el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE) para los países pobres, que les permitía, durante un período de hasta tres años, recibir asistencia cuyo reembolso se extendía a lo largo de un período de diez años (en contraste con los créditos ordinarios que habían de reembolsarse en uno o dos años). En noviembre de 1999 el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE) fue sustituido por el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP). Este servicio tiene por objeto apoyar programas para reforzar de manera sustancial y sostenible las posiciones de la balanza de pagos y para fomentar el crecimiento duradero.

6. Al mismo tiempo, los DERP sustituyeron a los documentos sobre parámetros de política económica que servían de apoyo al mencionado Servicio Reforzado de Ajuste Estructural. Los programas nacionales de reducción de la pobreza constituyen la base de los programas de préstamo del FMI y el Banco Mundial y para el alivio de la deuda de los PPME. Los rasgos esenciales de los DERP son: a) que se elaboran con participación de los interesados, b) que son de propiedad nacional y c) que establecen un marco de políticas y un programa para hacer frente a la pobreza.

7. Los países participantes en la iniciativa en favor de los PPME y en el Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE) tienen que presentar un DERP antes de solicitar nuevo apoyo del FMI o del Banco Mundial. Los Consejos de Administración de estas instituciones deben aprobar un DERP antes de acordar un programa de préstamos. Los Consejos de Administración del FMI y del Banco aceptan el DERP sobre la base de una estratégica política coherente, que será evaluada conjuntamente por el personal del Banco y del Fondo en función de sus objetivos y contenidos. Además, los Consejos de esas organizaciones tiene que examinar la medida en que los gobiernos han consultado a la sociedad civil y la manera en que se tratarán las cuestiones de gestión económica.

INTRODUCCIÓN

8. Ha transcurrido año y medio desde que los gobiernos del G-7 anunciaron una importante iniciativa de alivio de la deuda en su reunión anual de 1999 celebrada en Colonia (Alemania). En ese momento, muchos defensores del alivio de la deuda, en particular el Movimiento Jubileo 2000, aplaudieron la iniciativa ampliada en favor de los PPME como un importante paso del Banco Mundial y del FMI para encontrar una solución duradera a los problemas de la deuda de los países pobres. El elemento básico de la iniciativa ampliada en favor de los PPME eran las propuestas de conceder reducciones mayores de la deuda total acumulada y reducciones más

rápidas en los pagos del servicio de la deuda, atenuar los estrictos criterios exigidos para ello, y sobre todo, hacer de la reducción de la pobreza el eje de la iniciativa ampliada en favor de los PPME.

9. En el momento de iniciar la iniciativa ampliada en favor de los PPME, se prometieron en total 90 millardos de dólares de servicio de la deuda en favor de 33 países pobres, lo que significaría un costo estimado de 27 millardos para los acreedores, debido principalmente al fuerte descuento de los préstamos y a la ventaja de comprar la deuda hoy en vez de que ésta devengara intereses durante todo el período del préstamo. Sin embargo, cuando en septiembre de 2000 se celebró en Praga la reunión anual del FMI/Banco Mundial hubo pocos progresos sustantivos que comunicar en materia de alivio de la deuda al amparo de la iniciativa de Colonia. Los gobiernos del G-7 no habían llegado a cumplir la promesa hecha en la Cumbre de Colonia, en el verano de 1999, de condonar las deudas de por lo menos 20 naciones para el año 2000. El método de incrementos graduales había proporcionado alivio sólo a nueve países y no había proporcionado alivio al ritmo y en el grado requeridos.

10. El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó estas ideas en su informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su quincuagésimo quinto período de sesiones, sobre la reciente evolución de la deuda de los países en desarrollo (A/55/422, de 26 de septiembre de 2000). El Secretario General señaló que los principales obstáculos habían sido: a) que los gobiernos del G-7 no habían asignado recursos suficientes al Fondo Fiduciario para los PPME; y b) que la iniciativa ampliada en favor de los PPME incluso en su versión reformulada, seguía atrapada en una compleja red de requisitos de elegibilidad del FMI y el Banco Mundial que deben reflejarse en los DERP que los países tienen que preparar a fin de tener derecho a pleno alivio de la deuda después de alcanzado cierto punto. Pero los esfuerzos para cumplir los requisitos frecuentemente llevan muchos meses, incluso años, y su preparación cuesta a los solicitantes sus escasos recursos. Las pocas naciones que cumplen los requisitos han retirado o amenazan con retirar sus solicitudes, sintiéndose frustradas.

11. El presente informe examina los progresos realizados desde 1999 en la concesión de alivio de la deuda a los países que cumplen los requisitos, y analiza con sentido crítico el procedimiento de los DERP. El informe se basa en un análisis meticuloso de 9 de los 19 DERP presentados a los Consejos de Administración del FMI y del Banco Mundial hasta septiembre de 2000 para que los examinaran. Los 9 DERP provienen de África, aunque también se ha hecho un examen superficial del correspondiente documento de Honduras. En el momento de redactar el presente informe, sólo había tres documentos totalmente terminados: los de Uganda, Burkina Faso y Bolivia. El experto los ha estudiado detalladamente. Dado el límite de páginas fijado por las Naciones Unidas, no es posible una descripción detallada de los nueve documentos examinados. En los anexos se adjunta un resumen de cada documento que debe leerse junto con el análisis contenido en el texto.

I. POR QUÉ EL REY NO TIENE VESTIDO: LA INICIATIVA DE LOS PPME Y LA CRISIS DE FINANCIACIÓN

12. La iniciativa en favor de los PPME tiene por objeto reducir a niveles sostenibles las deudas de los países pobres que persigan reformas de política de la política económica y social, y se utiliza específicamente cuando los mecanismos tradicionales de alivio de la deuda no basten para

ayudar a los países a salir del proceso de reescalonamiento. Se espera que unas tres docenas de PPME reúnan los requisitos para recibir asistencia en el marco de la iniciativa ampliada en favor de los PPME, y la inmensa mayoría de ellos son países del África subsahariana. Hasta el momento se han examinado 17 países en el marco de la iniciativa ampliada, con previsiones que ascienden a unos 31 millardos de dólares de alivio del servicio de la deuda con el tiempo¹. Se está trabajando para preparar un programa de alivio de la deuda destinado a unos 20 países para fines de diciembre de 2000.

13. Sin embargo, pese a los buenos propósitos, la iniciativa ampliada está teniendo varios problemas, el principal de ellos es la financiación. Como se indicó al principio, se espera que tanto los acreedores multilaterales como los bilaterales proporcionen unos 28 millardos de dólares (en términos de valor actual neto) para financiar el programa de alivio de la deuda. De esta cantidad, se espera que cuatro acreedores multilaterales, a saber: el Banco Mundial, el FMI, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo, proporcionen unos 14 millardos de dólares; los acreedores bilaterales aproximadamente 13,2 millardos de dólares y los acreedores comerciales el resto. Los compromisos de los acreedores bilaterales han procedido en su mayoría de los acreedores del Club de París, muchos de los cuales han anulado cantidades considerables de deuda bilateral por encima de la asistencia prestada en el marco de la iniciativa en favor de los PPME. Sin embargo, las deudas contraídas con acreedores no pertenecientes al Club de París por países incluidos en dicha iniciativa, siguen en los libros de contabilidad, tema que se volverá a examinar más tarde en el presente informe.

Cuadro 1

Parte correspondiente a los acreedores en el alivio de la deuda de los PPME

Acreeedores	Porcentaje del alivio total de la deuda de los PPME
Total de los acreedores multilaterales	50
Banco Mundial	(22)
FMI	(8)
Banco Africano de Desarrollo	(8)
Banco Interamericano de Desarrollo	(4)
Otros acreedores (23 en total)	(8)
Acreeedores bilaterales (Club de París)	41
Acreeedores bilaterales (no pertenecientes al Club de París)	6
Entidades comerciales	3

Fuente: Datos del Ministerio del Tesoro de los Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial.

14. La falta de recursos financieros para financiarla se ha convertido en una preocupación cada vez mayor de las dos instituciones que presiden la iniciativa en favor de los PPME.

¹ FMI/AIF, Poverty Reduction Strategy Papers: Progress in Implementation, informe preparado por el personal del FMI y el Banco Mundial, 7 de septiembre de 2000.

El propio FMI ha expresado reservas acerca de participar en la iniciativa más allá del año 2000 a menos que se liberen recursos adicionales con cargo al dinero obtenido de la revaluación del oro que ahora se está invirtiendo en una cuenta a largo plazo. Muchos acreedores, en especial acreedores multilaterales y pequeños acreedores bilaterales, tienen dificultades para obtener los fondos requeridos para cubrir la parte que les corresponde en la financiación del Fondo Fiduciario para la iniciativa en favor de los PPME. Las restricciones jurídicas que rigen en las operaciones de esas instituciones han sido difíciles de superar.

15. Las principales razones de la pérdida de expectativas respecto de la financiación de la iniciativa estriban en la política de asignaciones presupuestarias de los principales países donantes. Los jefes de Estado de los países del G-7 pueden prometer alivio de la deuda durante las reuniones anuales. Pero, en definitiva, son los órganos legislativos y los parlamentos respectivos los que deben decidir cuánto dinero se asigna. Como el alivio de la deuda por encima de las asignaciones anuales para ayuda bilateral produce un aumento del costo presupuestario para cada país, muchos acreedores bilaterales tienen enormes barreras políticas que superar para obtener recursos adicionales de sus parlamentos respectivos. Esto es particularmente difícil en muchos países occidentales donde está aumentando la oposición a la ayuda exterior.

16. Por su parte, los bancos regionales de desarrollo -el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo- se rigen por normas que fijan un tope a la cantidad de recursos que pueden asignar al alivio de la deuda por temor de socavar su integridad financiera. Del total de la deuda pendiente de 29 países africanos, que asciende a 10,2 millardos de dólares, el Banco Africano del Desarrollo ha prometido conceder alivio de la deuda por valor de 2,2 millardos (valor actual neto). El Banco Africano de Desarrollo contribuirá con 370 millones de dólares de los EE.UU. de sus propios recursos y el resto procederá de fuentes externas. Análogamente, el Banco Interamericano de Desarrollo proyecta conceder alivio de la deuda por valor de 1,1 millardos de dólares (valor actual neto) frente a su deuda por cobrar que asciende a 3,8 millardos. Esta institución asignará 180 millones de dólares de sus propios recursos y el resto provendrá de fuentes bilaterales. Dada la elevada proporción del alivio de la deuda frente a la deuda pendiente, ambas instituciones están esforzándose por cumplir sus promesas obteniendo recursos externos de donantes bilaterales. Pero las promesas de los donantes están por obtenerse.

17. Por ejemplo, el hecho de que el Banco Interamericano de Desarrollo no pudiera obtener contribuciones voluntarias de donantes bilaterales a principios de 2000 hizo que el Fondo Monetario Internacional retuviera la entrega de la asistencia provisional a Honduras. El problema se complicó porque el Gobierno dejó de acelerar el programa nacional de privatización. Es probable que se produzcan situaciones similares cuando los donantes bilaterales encuentren dificultades para conseguir que sus órganos legislativos respectivos aprueben recursos adicionales para el alivio multilateral de la deuda por encima de sus respectivas iniciativas bilaterales. La combinación de la insuficiencia de recursos con la lentitud de los gobiernos de los PPME en la aplicación de las reformas convenidas constituye una receta para no obtener alivio en definitiva. Esta es, entre otras, una de las razones que se examinan a continuación por las que el alivio de la deuda debería desvincularse de los DERP.

18. Además de las 4 principales instituciones multilaterales, hay 23 instituciones multilaterales menores relativamente desconocidas, tales como el Banco de Desarrollo del África Oriental

(BDAO) (Kampala (Uganda)) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (Tegucigalpa (Honduras)) que se espera que participen en la financiación de la iniciativa en favor de los PPME. Aunque estas instituciones multilaterales de carácter regional apoyan el objetivo de la iniciativa, han sido reacias a financiar totalmente su contribución con cargo a sus propios recursos por considerar que ello amenazaría a su integridad financiera. Por esta razón, el Fondo Fiduciario para los PPME seguirá estando gravemente subfinanciado y subalimentado. A menos que los gobiernos del G-7 acuerden financiar la totalidad de la iniciativa para el alivio de la deuda mediante la venta de oro del FMI y una pequeña porción de los beneficios anuales del Banco Mundial durante un período determinado de tiempo, es probable que el proyecto en conjunto se detenga en el año 2001.

19. Además de la crisis de financiación, la iniciativa ampliada en favor de los PPME, en su forma actual, es insuficiente ya que no incluye las deudas debidas por los PPME a los acreedores que no pertenecen al Club de París y que no han sido reescaladas o atendidas durante un largo tiempo. Por siguiente, en el caso de estos países deudores la tasa de sostenibilidad de la deuda puede inducir a error, ya que la actual situación de la deuda en esos países es peor de lo que parece. Esto se debe a que en las cuentas de la reserva de la balanza de pagos incluyen dinero que debería haberse pagado a los acreedores que no son miembros del Club de París. Es más que probable que algunos PPME que tienen deudas con países no pertenecientes al Club de París vuelvan inmediatamente al estado "coma", ya que el procedimiento actual guarda silencio sobre la manera de tratar las deudas con los países que no pertenecen a ese Club².

20. Por último, está el problema, relativamente poco conocido, de las deudas entre los PPME, para el que no existe un mecanismo de solución. Por ejemplo, Tanzania es acreedora de Uganda. Análogamente Costa Rica y Guatemala tienen préstamos pendientes hechos a Nicaragua. Las deudas de estos países con sus vecinos se registran como parte de sus reservas en balanza de pagos, inflando así la posición de las reservas de cada uno de estos países deudores. Hay muchos otros PPME que están en la misma situación que Uganda y Nicaragua.

II. LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS SOBRE REDUCCIÓN DE LA POBREZA (DERP): UNA NUEVA FORMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL

21. El documento estratégico provisional sobre la reducción de la pobreza (DEPRP) se concibe como un proyecto para preparar el documento estratégico completo y como puente entre los objetivos a largo plazo de dicho documento y las necesidades nacionales a corto plazo en materia de financiación y alivio de la deuda. El documento provisional prepara el camino para que el país reúna los requisitos para su "punto de decisión" que va seguido de apoyo provisional (o de un préstamo) al Gobierno por parte del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP) anteriormente denominado Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE) del FMI.

² En el marco de la iniciativa ampliada en favor de los PPME, el valor actual de la deuda ha de reducirse a un máximo del 150% de las exportaciones (frente a un intervalo del 200 al 250% previsto en la iniciativa inicial) y del 250% de los ingresos públicos (anteriormente el 280%). El monto del alivio de la deuda que ha de entregarse se determina en el punto de decisión, basado en datos reales.

Dentro del marco de la iniciativa ampliada en favor de los PPME, el "punto de terminación" es un punto más de presión para influir en las políticas. A la mayoría de los países se les exigirá que terminen por lo menos un año de actuación después de la preparación de un documento estratégico completo sobre reducción de la pobreza a fin de reunir los requisitos para la reducción de la deuda. El documento estratégico establecerá también el marco de toda nueva asistencia en términos de concesión que aporten las instituciones financieras internacionales.

22. Al preparar el documento estratégico, se espera que los gobiernos indiquen claramente la relación entre las políticas macroeconómicas y los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente que han de alcanzarse para 2015³. Además el documento estratégico provisional debería detallar el destino que se propone dar al aumento de los recursos para la reducción de la pobreza. El documento estratégico provisional contiene los elementos siguientes:

- El compromiso de reducir la pobreza asumido por el gobierno y los principales elementos de su estrategia contra la pobreza.
- La adhesión a un calendario y un proceso consultivo para formular el documento estratégico completo con el FMI, el Banco Mundial y otros acreedores y donantes.
- Un marco macroeconómico y de políticas trienal, que se centre en la reducción de la pobreza por medio de acelerar el crecimiento (para muestra del marco de políticas, véase el anexo II). El marco de políticas se compone fundamentalmente de una lista de las condiciones de las políticas (114 en el caso de Tanzania).

23. El examen de los ocho documentos estratégicos provisionales y del documento estratégico definitivo provenientes de África, que figuran en los anexos I y II, revela un gran desequilibrio en la calidad de estos documentos, en particular los siguientes aspectos:

- La calidad de las estrategias de reducción de la pobreza y el nivel de participación de la sociedad civil se ven comprometidos porque se fija un plazo no realista para cumplir con la iniciativa.
- Un rasgo característico de muchos de los documentos examinados es el excesivo número de recetas o condiciones de las políticas. Por ejemplo, el marco de políticas de Tanzania para el período 2000-2002, que fue incluido como anexo al documento estratégico provisional por el Fondo y el Banco, enumera aproximadamente 157 políticas que el Gobierno debe aplicar durante ese período. Además se fijan más de 20 condiciones vinculadas al alivio de la deuda, 10 condiciones vinculadas a la

³ Entre esos objetivos figuran los siguientes: reducir a la mitad el nivel de pobreza extrema; reducir en dos tercios las tasas de mortalidad neonatal e infantil y en tres cuartos la tasa de mortalidad materna; alcanzar la enseñanza primaria universal en todos los países; proporcionar acceso a los servicios de salud reproductiva a todos los individuos de edad; eliminar las disparidades de género en la educación primaria y secundaria para 2005; y aplicar estrategias nacionales de desarrollo sostenible para 2005 a fin de garantizar que la pérdida actual de recursos ambientales termine mundialmente para 2015.

estrategia para la asistencia al país por el Banco Mundial y otras condiciones vinculadas a los préstamos de ajuste estructural financiados por el FMI y el Banco Mundial.

- El documento estratégico provisional de Benin, que incluye también un marco de políticas, incluye unas 111 condiciones que el Gobierno debe aplicar. El documento estratégico apenas se refiere a la manera en que se utilizará el alivio de la deuda, salvo la mención de que se dará prioridad a los servicios sociales al asignar la asistencia externa.
- En tanto que los documentos estratégicos provisionales de Ghana, Kenya y Mozambique y el documento estratégico definitivo de Uganda contienen datos actualizados, la calidad de los documentos estratégicos provisionales del Chad, el Senegal y Tanzania se ve menoscabada porque los datos de las encuestas de hogar son relativamente limitados o anticuados.
- Todos los documentos estratégicos examinados para este informe excepto el de Kenya adolecen de la falta de datos desglosados por género.
- Ninguno de los documentos estratégicos provisionales tratan de integrar los grandes principios internacionales en materia de derechos humanos, a saber: la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y varios convenios de la OIT.
- En cuanto a las cuestiones destacadas, los nueve documentos recalcan la importancia del crecimiento para reducir la pobreza, pero ninguno de ellos demuestra la relación entre ambos.
- Entre otros temas comunes figuran la importancia esencial del desarrollo rural y de los esfuerzos especiales para ayudar a los grupos en situación desventajosa (por ejemplo las mujeres y los niños). Se destaca mucho la necesidad de aumentar el gasto social, pero no se explica claramente cómo los aspectos macroeconómicos guardan relación con los objetivos de reducción de la pobreza.
- Los nueve documentos estudiados destacan la importancia de la transparencia, de la rendición fiscal de cuentas y de mejorar el acceso de los pobres a los servicios públicos. Sin embargo, todos los documentos guardan silencio sobre la manera de lograr la transparencia y la rendición de cuentas cuando elites "cleptocráticas" son las que dirigen la aplicación de los marcos estratégicos contra la pobreza. La relación entre el imperio del derecho y la justicia económica no se trata de manera realista o suficiente. La transparencia y la rendición de cuentas no van a conducir por sí solas a la justicia económica. Se requieren además medidas anticorrupción, entre otras cosas.
- Varios documentos (Ghana, Kenya y Tanzania) señalaron explícitamente la relación entre las prioridades nacionales en materia de reducción de la pobreza y los objetivos de desarrollo internacionales para 2015. Esto se hará ajustando las prioridades del presupuesto actual.

- Los documentos estratégicos provisionales de Kenya y Ghana introducen nuevas cuestiones, tales como la gestión económica, la lucha contra la corrupción, etc.
- El documento estratégico de Kenya señala la importancia de la reforma agraria y propone la entrega de títulos de propiedad individual a 300.000 campesinos sin tierra.

Cuadro 2

Documentos estratégicos (provisionales y definitivos) sobre reducción de la pobreza examinados para este informe y fecha de su examen por los Consejos de Administración del Banco Mundial y el FMI

País	Acompañado por	Documentación	Examinado por el Consejo de Administración del Banco Mundial	Examinado por el Consejo de Administración del Fondo Monetario Internacional
Ghana	Servicio para el crecimiento y lucha contra la pobreza (SCLP)	Documento estratégico provisional	24 de agosto de 2000	22 de agosto de 2000
Chad	Iniciativa PPME, SCLP	Documento estratégico provisional	25 de julio de 2000	25 de julio de 2000
Uganda	Iniciativa PPME	Documento estratégico definitivo	2 de mayo de 2000	1º de mayo de 2000
Zambia	SCLP	Documento estratégico provisional	4 de agosto de 2000	26 de julio de 2000
Benin	Iniciativa PPME, SCLP	Documento estratégico provisional	13 de julio de 2000	17 de julio de 2000
Tanzanía	Iniciativa PPME	Documento estratégico provisional	4 de abril de 2000	31 de marzo de 2000
Senegal	Iniciativa PPME	Documento estratégico provisional	20 de junio de 2000	21 de junio de 2000
Kenya	SCLP	Documento estratégico provisional	1º de agosto de 2000	27 de julio de 2000
Mozambique	Iniciativa PPME	Documento estratégico provisional	6 de abril de 2000	7 de abril de 2000

Fuente: FMI/AIF, "Poverty Reduction Strategy Papers-Progress in Implementation", 7 de septiembre de 2000, pág. 7.

A. Incongruencia de las políticas: objetivos macroeconómicos y objetivos en materia de pobreza

24. En la mayoría de los países examinados, los amplios objetivos macroeconómicos son incompatibles con los objetivos de reducción de la pobreza. A la misma conclusión se llegó en un informe reciente de la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos de América, que señaló que existe conflicto entre el deseo de proporcionar rápidamente alivio de la deuda y la

necesidad de garantizar que exista un marco adecuado de reducción de la pobreza⁴. Sólo el documento estratégico de Uganda está firmemente anclado en el Plan General de Acción para la erradicación de la pobreza, elaborado inicialmente en 1997 y revisado a fin de tener en cuenta nuevos datos sobre la pobreza, planes sectoriales detallados y la consulta directa con los pobres. Pero llevó más de dos años y medio terminar este proceso. En la actualidad la sociedad civil participa en la vigilancia de su aplicación.

25. ¿Qué explica esta incongruencia entre los elementos macroeconómicos del documento estratégico provisional y los objetivos de reducción de la pobreza? La respuesta ha de encontrarse en la desigualdad de relaciones de poder entre los países endeudados y las instituciones que gestionan la iniciativa para los PPME, a saber: el FMI y el Banco Mundial. Lo que se desprende claramente de nuestro análisis es que los países han tratado demasiado de adivinar el pensamiento del FMI y el Banco Mundial. Los gobiernos de los PPME tratan de que los documentos estratégicos cumplan los criterios para los préstamos fijados por el Fondo y el Banco, por lo que han hecho demasiado hincapié en los aspectos macroeconómicos, la reforma fiscal y las medidas de privatización para agradar a esas poderosas instituciones, sin pensar a fondo cómo esas políticas repercutirían en la reducción de la pobreza y en qué contexto. En definitiva, lo que importa más a esos gobiernos es obtener de esas instituciones el flujo de efectivo que desesperadamente necesitan. Como resumió un ministro de hacienda entrevistado para este informe: "No queremos conjeturar lo que piensa el Fondo. Preferimos adelantarnos a sus deseos dándoles lo que quieren antes de que empiecen a darnos lecciones sobre esto y aquello. Así les dejamos ver claramente que sabemos lo que estamos haciendo, es decir, que creemos en el ajuste estructural".

⁴ United States General Accounting Office, Debt Relief Initiatives for Poor Countries Faces Challenges, Report to Congressional Committees, GAO/NSIAD-00-161, Washington D.C., Estados Unidos de América.

26. La decisión de los deudores de "aplacar" al FMI es tanto política como financiera, ya que para tener derecho al alivio de la deuda dentro de la iniciativa para los PPME hay que cumplir la condición "buen comportamiento" al aplicar las políticas del FMI y el Banco Mundial. Aunque debe alentarse y apoyarse a los países a adoptar medidas razonables que sean lógicas desde el punto de vista económico y político, los programas apoyados por el FMI siguen siendo estrictos e inflexibles y en algunos casos sumamente punitivos⁵, dejando escasísimo margen de maniobra a los países. Los programas del Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE), ahora denominado Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP), siguen centrándose en los problemas macroeconómicos y financieros. No se indica cómo los documentos estratégicos sobre reducción de la pobreza (DERP) complementan el énfasis macroeconómico de los documentos estratégicos sobre reducción de la pobreza del SCLP.

27. De lo que no se han dado cuenta los autores de la iniciativa en favor de los PPME es que dos decenios de programas de ajuste estructural no ayudaron a los países a superar la crisis por medio de las exportaciones y que fue su incapacidad para servir la deuda y la consiguiente erosión social lo que motivó la iniciativa en favor de los PPME. El aumento de la malnutrición, la disminución del número de alumnos matriculados y el aumento del desempleo se han atribuido a las políticas de ajuste estructural. Sin embargo, esas instituciones siguen recetando la misma medicina como condición para el alivio de la deuda, desconociendo las pruebas abrumadoras de que los programas de ajuste estructural han aumentado la pobreza.

28. Hasta ahora la preparación de los documentos estratégicos provisionales ha sido relativamente fácil, ya que la mayoría de los gobiernos, para preparar sus respectivos documentos estratégicos, han utilizado abundantemente los informes existentes sobre las estrategias nacionales contra la pobreza. Y esos documentos reflejan claramente estrategias de reforma económica, tales como los programas de ajuste estructural, que no han conseguido reducir la pobreza. Todos los documentos estratégicos examinados recalcan la necesidad de reestructurar, redimensionar, recuperar los costos y pagar menos a los maestros. Todo esto, ¿cómo va a eliminar la pobreza? El uso de los documentos estratégicos provisionales como medida de transición, mientras se trata el problema inmediato del flujo de efectivo, no tiene en cuenta la dificultad de elaborar una auténtica estrategia nacional contra la pobreza, basada en el consenso y el consentimiento de todos los interesados. Para el Banco y el Fondo se trata de un proceso fundamentalmente tecnocrático. La siguiente fase resultará más difícil, y hasta fecha muy reciente, el Banco Mundial y el FMI no han apreciado la magnitud del cambio requerido para hacerla realidad. En muchos PPME, en los que no hay un régimen democrático, será un proceso prolongado⁶.

29. La participación de los interesados en el diseño de un marco estratégico nacional contra la pobreza es una innovación importante, y el FMI y el Banco Mundial pueden desempeñar un

⁵ Véase el resumen del documento estratégico provisional de Benin, incluido en el anexo I. Ese documento impone 117 condiciones.

⁶ Banco Mundial/FMI, "Heavily Indebted Poor Countries Initiative and Poverty Reduction Strategy Papers: Progress Report", memorando conjunto del Presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, y el Director Gerente del FMI, Horst Kohler, 7 de septiembre de 2000, pág. 6.

papel constructivo ayudando a los países a alcanzar ese objetivo. Desgraciadamente la mayoría de los PPME simplemente no tienen los necesarios datos actualizados sobre la pobreza ni la capacidad institucional y técnica para emprender un estudio amplio de la pobreza y para integrar la estrategia de reducción de la pobreza en un marco macroeconómico. A falta de esos conocimientos cruciales, no es realista esperar que esos países puedan llegar a un marco nacional de reducción de la pobreza, basado en el consenso. El Banco y el Fondo están en mejores condiciones que nadie para reconocer que esa información sobre amplios aspectos de la política económica y social son difíciles de obtener en muchos PPME⁷. Incluso es difícil configurar un perfil de la pobreza, ya que en la mayoría de los PPME no se dispone de una encuesta nacional reciente sobre los hogares.

30. Dados estos problemas, la decisión de sujetar el alivio de la deuda a la condición de preparar documentos definitivos sobre la reducción de la pobreza no es realista. Dado que el resultado de la consulta nacional durante la preparación del documento estratégico definitivo sobre la reducción de la pobreza es incierto, resulta aconsejable desligar el alivio de la deuda del documento estratégico sobre la reducción de la pobreza (DERP), a fin de que los recursos puedan asignarse directamente a programas contra la pobreza sin más demora. Pero hay que velar atentamente por que los fondos para alivio de la deuda no se utilicen para fines corruptos.

B. Participación de los ciudadanos

31. Se supone que los documentos estratégicos sobre la reducción de la pobreza (DERP) han de ser impulsados por el país, y preparados y elaborados de manera transparente con amplia participación de la sociedad civil. Sin embargo, el "módulo" para preparar tales documentos, es decir: cuál debe ser su contenido, lo diseñan los donantes, lo que quita autenticidad a la elaboración nacional.

32. La participación ciudadana en la preparación de los documentos estratégicos no ha sido transparente en varios de los países examinados, aunque el experto independiente señala como excepción el documento estratégico definitivo de Uganda. Aunque en el documento estratégico provisional se ha invitado a grupos de la sociedad civil a participar ampliamente en los debates sobre la planificación de la política social, de hecho se les ha excluido a la hora de debatir el contenido de las opciones de política macroeconómica. En Ghana, Tanzania y Kenia, por ejemplo, el contenido del marco de políticas, que forma parte del documento estratégico provisional, nunca se hizo público durante las consultas nacionales. En unos pocos países, se celebraron consultas sólo con los ministerios interesados, aunque los documentos pertinentes dicen que esas consultas tendrán lugar durante la preparación del documento estratégico completo.

⁷ En un memorando de fecha 7 de septiembre de 2000 dirigido a los miembros del Comité de Desarrollo y a los miembros del Comité Financiero y Monetario Internacional, el Presidente del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, y el Director Gerente del FMI, Horst Kohler, escribieron lo siguiente: "La transición a los documentos estratégicos definitivos sobre reducción de la pobreza completos probablemente presentará otros problemas, en particular la contabilidad efectiva de las entradas y salidas; el seguimiento del gasto público relacionado con la pobreza, y la integración de las estrategias de reducción de la pobreza en un marco macroeconómico congruente", pág. 5.

33. En Tanzania los grupos de la sociedad civil pedían una participación más activa en toda la elaboración del documento estratégico. Sin embargo, se los hizo participar de una manera tibia y superficial⁸. El Gobierno elaboró por su cuenta el documento estratégico provisional, mientras los grupos de la sociedad civil participaban en un proceso separado, convocado por la Coalición de Tanzania para la Deuda y el Desarrollo. Las principales cuestiones macroeconómicas y de ajuste estructural se trataron en negociaciones secretas, celebradas paralelamente a las consultas sobre el documento estratégico. En una fase ulterior, grupos de la sociedad civil consiguieron participar en las sesiones sobre documentos ya preparados por el Gobierno. Más que un proceso de participación sobre la mejor manera de combinar las aportaciones de la sociedad civil y del Gobierno, las aportaciones de los grupos de la sociedad civil se enviaron simplemente al Gobierno para que las incluyera. Todas las consultas se celebraron precipitadamente, sin permitir que hubiera diálogo, debate y discusión verdaderos. En la redacción definitiva del documento estratégico provisional no se invitó a participar a los grupos de la sociedad civil aunque habían argüido que en la fase final deberían participar representantes de los grupos de la sociedad civil⁹.

34. En su forma actual, el documento estratégico de Tanzania carece de credibilidad por falta de participación informada de los grupos de ciudadanos. La deficiencia de las consultas repercutirá enormemente en la preparación del documento estratégico completo. Muchos grupos de la sociedad civil se consideran engañados por el Gobierno y por los donantes, en particular el Banco Mundial, que ha destacado la importancia de la participación de la sociedad civil en la preparación y aprobación de los documentos estratégicos. Para la preparación del documento estratégico completo, la resolución de este desacuerdo entre el Gobierno y la sociedad civil será un problema más difícil que el problema de los datos y los conocimientos técnicos. El documento provisional debería considerarse un elemento para la elaboración del documento estratégico completo más que un nuevo instrumento para conseguir que el mayor número posible de países reúnan los requisitos para el punto de decisión a fin de que puedan obtener el alivio provisional de la deuda.

35. Pese a las críticas antes formuladas, los documentos estratégicos sobre reducción de la pobreza (DERP) pueden servir de instrumento para que los países en desarrollo apliquen estrategias de reducción de la pobreza que sean verdaderamente nacionales y participativas. El Banco y el Fondo pueden desempeñar un importante papel en este proceso, pero sólo si consiguen cambiar su actitud respecto a la condicionalidad y a la reforma macroeconómica. Aunque ambas instituciones reconocen cada vez más la necesidad de vincular las políticas macroeconómicas a objetivos amplios de desarrollo social, persiste la tendencia a diseñar una

⁸ Observaciones tomadas del Proyecto de creación de redes en materia de género en Tanzania, respecto a la aprobación por el FMI y del Banco Mundial del "Documento estratégico sobre reducción de la pobreza" de Tanzania, que pueden obtenerse en el siguiente sitio en la Web: <http://www.global.challenge.juno.com>.

⁹ Charles Abugre, "Who governs low-income countries? Summary of an interview", *News & Notices*, vol. 2, N° 3 (otoño de 2000).

política macroeconómica centrada en criterios de mercado y en preocupaciones financieras¹⁰. Esta tendencia conduce siempre a una situación en la que el desarrollo humano y social y la equidad se sacrifican a consideraciones financieras. Los apetecidos objetivos sociales y de derechos humanos, tales como la equidad, la atención de las necesidades básicas, etc. tienen que ser el eje de la política macroeconómica si se quiere promover un desarrollo orientado a la población y un planteamiento del desarrollo basado en los derechos.

III. ÍNDICES FICTICIOS O PUEDE LA RELACIÓN DE "SOSTENIBILIDAD" DE LA DEUDA DECIRNOS HASTA QUÉ PUNTO LA SITUACIÓN DE UN PAÍS ES MALA

36. En un informe reciente de Oxfam se llegaba a la conclusión de que la economía que podían efectuar en su presupuesto anual la mayoría de los países a los que se ofrece el alivio de la deuda con la iniciativa en favor de los PPME será modesta. Unos países, entre otros el Senegal, Tanzania y Zambia, se hallarán al final del proceso en la perversa situación de pagar más por el servicio de la deuda. El pago de la deuda seguirá absorbiendo una parte desproporcionada de los ingresos gubernamentales y esa parte será superior al 15% en seis países y al 40% en Zambia, el Camerún y Malawi¹¹. El hecho de que se pueda producir tal situación despierta dudas en cuanto a la viabilidad de la iniciativa en favor de los PPME. No tiene sentido ejercer tal presión sobre estos países pobres y desesperados¹².

37. La estrategia que actualmente se sigue para facilitar el alivio de la deuda a los PPME que cumplen las condiciones necesarias es verdaderamente insuficiente. Como ejemplo cabe citar a Mozambique y Zambia. Mozambique fue el primer candidato a la iniciativa en favor de los PPME en 1996 y entonces se pensó que el plan para el alivio de la deuda liberaría finalmente al país de la esclavitud que constituía la deuda pero en 1998, Mozambique, con 6 millardos de dólares de deuda, se encontró reembolsando más de 100 millones de dólares al año en servicio de la deuda, pese a la condonación de 1,4 millardos aproximadamente de su deuda con el FMI y el Banco Mundial. La reducción efectiva ascendió a poco más de 10 millones de dólares al año

¹⁰ Fantu Cheru, "Mainstreaming human rights in macroeconomic policy-making: a closer look at structural adjustment programs", estudio preparado para el Seminario de formación en derechos humanos del PNUD, Windhoek (Namibia) 9 de octubre de 1999.

¹¹ Oxfam International, "HIPC leaves poor countries heavily in debt", 18 de septiembre de 2000.

¹² En un artículo titulado "The charade of debt sustainability", publicado en el número del Financial Times de Londres del 26 de septiembre de 2000, el economista Jeffrey Sachs decía: "El FMI y el Banco Mundial han sido portavoces de un engaño en nombre de los gobiernos del G-7 con su charada acerca del análisis de la "sostenibilidad de la deuda" de los países más pobres. Este análisis no tiene nada que ver con la sostenibilidad real de la deuda, porque ignora la muerte innecesaria de millones de personas por falta de acceso a la nutrición y a los medicamentos básicos. El dinero que se podría destinar a la salud pública se destina en cambio al pago de una deuda con los gobiernos occidentales e incluso con el FMI y el Banco Mundial".

solamente, de modo que Mozambique siguió pagando por concepto de servicio de la deuda más del 20% de su ingreso de divisas¹³.

38. El caso de Mozambique se complicó con la publicación de una carta de acuerdo de marzo de 1998 entre el Banco Mundial y el Gobierno, de la que ni el Parlamento ni la sociedad civil habían tenido conocimiento y en la cual el Gobierno aceptaba cumplir varias condiciones macroeconómicas, entre otras la privatización del suministro de agua municipal, para que se le concediese el alivio de la deuda como PPME. El clamor público por las condiciones impuestas para la obtención del alivio, en particular la presión ejercida por el movimiento Jubileo 2000 condujo a que se hicieran unas concesiones ligeramente mayores a mediados de 1999. Se espera que el reembolso medio de la deuda disminuya a 73 millones de dólares al año entre 1999 y 2005, en comparación con 114 millones al año entre 1995 y 1998. Para obtener este alivio adicional, el Gobierno aceptó cumplir 71 condiciones nuevas impuestas por el FMI, entre otras la prohibición de reactivar la industria de transformación del anacardo utilizando las políticas industriales tradicionales.

39. Zambia corrió la misma suerte que Mozambique¹⁴. Incluso con la aplicación íntegra del principio de alivio de la deuda en favor de los PPME, la deuda de Zambia no habría alcanzado un "nivel sostenible" hasta después de 2005, según el propio análisis del FMI. A comienzos de septiembre de 2000, el FMI propuso cuatro opciones para aligerar las obligaciones del servicio de la deuda después de terminado el mencionado proceso de alivio de la deuda:

- Concentración de un 75% de la asistencia provisional facilitada como parte de la iniciativa al comienzo del período. El servicio de la deuda en esta opción seguiría siendo superior al servicio de la deuda actual y no se observan pues los objetivos de la iniciativa.
- Reescalonamiento del préstamo del Servicio de Ajuste Reestructural (SAR) al FMI. Ello sólo desplazaría la carga principal de la deuda a un período diferente en el futuro.
- Concesión de un préstamo en el ámbito de la iniciativa para los PPME; este préstamo no será objeto de otra operación de alivio de la deuda en el futuro.
- Por último: a) combinación de donaciones y préstamos de la iniciativa en favor de los PPME y b) reducción de la deuda de Zambia a una relación con las exportaciones de 11,7% en 2001 y de 8,5% en 2005. Con esta variante, la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos sería de 23% en 2001 y, como no descendería por debajo del 15% hasta el 2007, sigue siendo insuficiente.

¹³ Joseph Hanlon, "New official data shows Mozambique gains little or nothing from debt relief", *Jubilee 2000 Coalitions*, 4 de junio de 1998.

¹⁴ Carta del Sr. Salih Booker, Director del Africa Policy Information Center, de fecha 27 de noviembre de 2000, dirigida a Tim Geithner, Subsecretario de Relaciones Internacionales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la deuda de Zambia.

40. En su carta de 17 de octubre de 2000 al Director Gerente del FMI, Sr. C. D. R. Rustomjee, el Ministro de Finanzas y Desarrollo Económico de Zambia, el Dr. Katele Kalumba, reiteraba en los siguientes términos la decepción de su Gobierno ante la propuesta formulada por el Fondo:

"... Si el objetivo fundamental de la iniciativa ampliada para los PPME es la reducción de la pobreza, las actuales propuestas, que se traducen en un nivel de servicio de la deuda igual o superior, son incompatibles con el espíritu de la iniciativa en su conjunto y, ciertamente, del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (SCLP). La incompatibilidad es todavía mayor si se tiene en cuenta que el servicio de la deuda con el Fondo, creador y patrocinador de la iniciativa para los PPME y del SCLP, aumentará considerablemente una vez alcanzado el punto de decisión."

41. Los acontecimientos que rodearon el intercambio entre el FMI y el Gobierno de Zambia suscitaron considerables protestas y presiones públicas que tenían por objeto obligar al Fondo a cambiar de posición y a adoptar un criterio más razonable que no agravase la deterioración de la situación social del país. En respuesta a estas presiones públicas, el Directorio Ejecutivo del FMI modificó el 1º de diciembre de 2000 las normas que regían la asistencia prestada por el Fondo a Zambia en virtud de la iniciativa ampliada en favor de los PPME y permitió así que el Fondo acelerase el alivio de la deuda de Zambia. El Fondo acordó reducir efectivamente la deuda de Zambia con el FMI en dos tercios aproximadamente. Según el Director del Departamento África del Fondo, las transferencias netas a Zambia aumentarán en unos 100 millones de dólares en 2001, lo que equivaldría al 15% aproximadamente del producto interno bruto, y el FMI estará aportando más de lo que obtiene por el pago del servicio de la deuda¹⁵.

42. El nivel inadecuado de alivio de la deuda es sólo uno de los problemas que acompañan a la iniciativa ampliada en favor de los PPME. Las condiciones poco realistas que el FMI impone a los países que cumplen los requisitos necesarios para la concesión del alivio de la deuda son el segundo de los problemas más pernicioso. Aunque no hay pruebas claras que demuestren que el FMI y el Banco Mundial están dictando directamente su política a los PPME, los gobiernos saben por experiencia lo que las dos poderosas instituciones esperan de ellos. Los objetivos macroeconómicos estrictos (que normalmente figuran en los programas clásicos de ajuste estructural) ocupan un lugar destacado en los diez documentos estratégicos provisionales de reducción de la pobreza que se examinaron para el presente informe, puesto que los países tratan de enviar una señal clara al FMI para desencadenar la concesión de asistencia provisional.

43. Para que la iniciativa ampliada en favor de los PPME tenga éxito es preciso, pues, evitar una condicionalidad excesiva, especialmente mientras existan tan pocas pruebas del éxito que la condicionalidad de los programas tiene en la reducción de la pobreza. Más importante todavía, la iniciativa ha de conceder a los países que se enfrentan con importantes crisis humanitarias una flexibilidad mayor. Esos países se ven obligados a tomar decisiones y atribuir los recursos de una forma que no corresponde a la planificación y gestión del desarrollo en condiciones normales, dada su necesidad urgente de redistribuir los fondos para conseguir ante todo y sobre

¹⁵ "Change to HIPC rules will help Zambia", carta al editor del Sr. G. E. Goudwe, Director del Departamento África del Fondo Monetario Internacional, Financial Times, 8 de diciembre de 2000.

todo que la población permanezca viva. El factor tiempo es evidentemente crítico. Frente a la pobreza de las masas y a las urgencias humanitarias y de salud, no hay tiempo para esperar a que se efectúe una evaluación del cumplimiento trienal de las condiciones para llegar al punto de terminación antes de que los países puedan obtener una ayuda completa.

44. Mejor todavía, es necesario desvincular el alivio de la deuda de todo el proceso de elaboración de los documentos estratégicos sobre reducción de la pobreza de modo que los países dispongan del tiempo necesario para preparar planes nacionales de reducción de la pobreza basados en un consenso, sin la presión que ejerce sobre ellos el tener que complacer al FMI y al Banco Mundial para obtener una ayuda provisional. Tanto los acreedores como los deudores deben prestar una seria atención a la necesidad urgente de vincular las políticas macroeconómicas y los objetivos de desarrollo social. En la situación actual, la desconexión entre unos y otros es demasiado importante para que sea posible obtener el resultado apetecido.

45. Por último, procede referirse brevemente a la relación entre las instituciones de Bretton Woods y las políticas de los gobiernos del G-7, que determinan en la práctica el programa de ambas instituciones. Éstas sirven sobre todo los intereses de los principales miembros¹⁶. Dado que el FMI y el Banco Mundial no tienen, pese a que pretendan lo contrario, el monopolio de los conocimientos sobre desarrollo económico y política social es muy reprobable que los gobiernos del G-7 sigan imponiendo, en su calidad de miembros del Fondo y del Banco, un diagnóstico defectuoso de los países endeudados. A este respecto, no hay que subestimar en modo alguno la función del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos¹⁷.

IV. RECOMENDACIONES: LA VÍA DEL PROGRESO

46. La financiación insuficiente de la iniciativa en favor de los PPME, el retraso innecesario de la concesión de alivio inmediato porque los países tropiezan con dificultades para preparar un documento estratégico sobre reducción de la pobreza que satisfaga todas las condiciones, y la estrategia de participación superficial e insuficiente para la inclusión de los grupos de la sociedad civil ofrecen a las instituciones y a los gobiernos acreedores motivos suficientes para examinar una vez más todo el asunto.

¹⁶ Véase la cita de Jeffrey Sachs en la nota 12.

¹⁷ Por ejemplo, Gordon Brown, Ministro de Hacienda del Reino Unido, es un gran defensor del alivio de la deuda. Su hincapié en la condonación acelerada de la deuda está en contradicción con la posición de su homólogo de los Estados Unidos, Lawrence Summers. Aunque Summers es también partidario de condonar la deuda, su posición es que los países deben efectuar importantes reformas económicas y comprometerse a seguir las estrategias de reducción de la pobreza aprobadas por el Banco y el Fondo si esperan obtener una recompensa. Sin embargo, hay problemas técnicos prácticos y políticos que impiden a muchos PPME preparar unas estrategias de reducción de la pobreza auténticas y basadas en el consenso, por las razones que antes se han detallado. Dada la diferencia de poder de los gobiernos del G-7 en lo que respecta a la coordinación económica internacional, lo que el Banco y el FMI pueden hacer tiene un límite. Tal es el complejo y controvertido terreno político internacional en que se plantea la cuestión del alivio de la deuda de los países pobres.

47. Al mismo tiempo, no hay que restar importancia a la necesidad de conceder socorro inmediato a los PPME que cumplan las condiciones necesarias, dada su precaria situación económica y política en el momento actual. Sin embargo, para activar el proceso, se recomienda la adopción de las siguientes medidas:

- a) Desvincular el alivio de la deuda de los PPME del proceso de preparación de documentos estratégicos sobre reducción de la pobreza. La existencia de un verdadero plan nacional de reducción de la pobreza sólo será posible si el FMI y el Banco Mundial suprimen la amenaza de la "condicionalidad" para los gobiernos vulnerables. La vinculación del alivio de la deuda y la preparación de esos documentos estratégicos excluye la "autonomía" de los países para elaborar un plan en el que se establezca clara y explícitamente una relación entre las políticas macroeconómicas y los objetivos de reducción de la pobreza. Ello requiere tiempo, investigaciones y consultas exhaustivas con amplios sectores de la población. La única condición ha de ser que los países a los que se conceda el alivio de la deuda establezcan una entidad independiente, como en el Plan de Acción para la reducción de la pobreza de Uganda, que canalice los recursos liberados hacia el desarrollo social. Esta entidad -de preferencia un órgano no gubernamental independiente- administrará el fondo. La entidad habrá de seguir las importantes normas que rigen el funcionamiento de los sistemas de control financiero, y de evaluación y supervisión del rendimiento, para cerciorarse de que el Gobierno no podrá detraer recursos del fondo destinados al alivio de la deuda y utilizarlos para otros fines improductivos. Un comité permanente, integrado por representantes de las organizaciones no gubernamentales, el Gobierno y la comunidad de donantes, supervisará la gestión de la entidad independiente para velar por la responsabilidad financiera y del programa¹⁸.
- b) No se debe confiar al Banco Mundial y al FMI la función exclusiva de supervisar los programas de reducción de la pobreza en los países pobres. Se debe incluir en el proceso a otros organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, el UNICEF, la UNCTAD y la OIT.
- c) Teniendo presente el informe del Secretario General sobre el tema, es necesario desplegar un esfuerzo para iniciar nuevas series de conversaciones con objeto de hallar una solución duradera a la aplastante carga de la deuda de muchos países pobres, incluidos los PPME. Las nuevas series de conversaciones deben comenzar con el claro compromiso de que todas las deudas de los PPME se condonarán, sin condición alguna, y de que la lista de países con derecho a esta clase de asistencia se ampliará para incluir en ella a algunos a los que no se había dado anteriormente entrada en el proceso porque no cumplían entonces las condiciones del FMI.
- d) Suprimir el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del FMI (el antiguo SRAE) porque se trata sencillamente de un servicio de financiación

¹⁸ Fantu Cheru, "Debt relief and social investment: linking the HIPC initiative to the HIV/AIDS epidemic in Africa, the case of Zambia", en Review of African Political Economy, diciembre de 2000.

pagado por los donantes bilaterales para saldar las deudas de los gobiernos de PPME con el FMI. El Fondo puede saldar esas deudas mediante la venta de oro (proceso de revaluación) en vez de mediante contribuciones voluntarias de donantes bilaterales. Los recursos bilaterales que van a ese servicio deberían destinarse en cambio a financiar un alivio de la deuda bilateral adicional, aumentar la asistencia bilateral, cofinanciar directamente programas específicos, como los de lucha contra el VIH/SIDA, la educación de niñas o la reconstrucción y la rehabilitación de los PPME después de un conflicto.

- e) Por último, es importante que los gobiernos deudores de países del Tercer Mundo, las instituciones financieras multilaterales y los movimientos sociales que se ocupan de asuntos de justicia económica mundial emprendan un serio diálogo sobre la manera de integrar los problemas de la política macroeconómica en unos objetivos de desarrollo social más amplios. Este diálogo debe partir del acuerdo de discutir y debatir los resultados de las investigaciones sobre el efecto económico y social del ajuste estructural obtenidos con diez estudios de casos nacionales, la mayoría de los cuales fueron efectuados conjuntamente con el Banco Mundial en el ámbito de la iniciativa que recibe el nombre de Red internacional de examen participativo del ajuste estructural (SAPRIN). Este diálogo, si avanza constructivamente, será beneficioso para cada uno de los participantes que podrán así formular y aplicar políticas alternativas de ajuste estructural que no sean regresivas y que permitan una mayor transformación.

Anexo I

RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS SOBRE LA REDUCCIÓN
 DE LA POBREZA (DERP): CHAD Y MOZAMBIQUE

CHAD	
<u>Elementos fundamentales</u>	
<p>Aunque los datos relacionados con la pobreza escasean y los que existen no son fidedignos, se estima que el 54% de la población del país sufre de pobreza. El ingreso anual medio es de 98.000 francos CFA (180 dólares de los EE.UU.). El 77% de las mujeres y el 55% de los hombres carecen de instrucción. Sólo el 27% de los hogares tienen acceso a un agua potable inocua y el 40% de los niños menores de 5 años padecen malnutrición crónica.</p> <p>La lucha del Gobierno contra la pobreza, como piedra angular de la estrategia de desarrollo, se articula en el plan de orientación de 1998 a 2005, cuyo objetivo estratégico es combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. Los cuatro objetivos correspondientes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Continuar y consolidar el proceso de democratización de la vida política y social para garantizar la seguridad de las personas y de los bienes, aumentar la participación de la población en la vida política, económica y social y en el proceso de adopción de decisiones y el establecimiento de estado de derecho y de normas racionales de gobierno y administración; - Alcanzar un alto nivel de crecimiento económico sostenido, que conduzca a la creación de empleo y a un aumento de los ingresos; - Desarrollar los recursos para promover un aumento de la productividad a largo plazo de la mano de obra, ofreciendo un mejor acceso a los servicios sociales básicos, la asistencia sanitaria, la educación y la protección social, así como al mercado del trabajo; - Restablecer y salvaguardar el equilibrio ecológico de los ecosistemas haciendo particular hincapié en los problemas del medio ambiente que acompañan a la actividad humana. 	
<u>Política macroeconómica</u>	<u>Política social</u>
<p><u>Objetivos</u> (del 2000 al 2002):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tasa de crecimiento real del PIB de 5% por lo menos; - Inflación anual inferior al 3%; - Aumento del actual superávit del sector primario equivalente al 1,7% del PIB para el año 2002; 	<p><u>Actividades generales encaminadas a reducir la pobreza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejoramiento del desarrollo rural; - Remoción de minas y reintegración del personal militar desmovilizado; - Organizaciones no gubernamentales y formación en organización del desarrollo;

<ul style="list-style-type: none"> - Reducción del déficit externo actual (incluidos los ingresos del petróleo y las donaciones) al 14% para el año 2002. 	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de asociaciones económicas de base; - Creación de una red independiente de cooperativas de crédito y ahorro y del correspondiente sindicato; - Medidas para la protección de los grupos vulnerables.
<p><u>Ajuste estructural</u> (de 2000 a 2002):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener la estabilidad macroeconómica, continuar la consolidación fiscal y acelerar el crecimiento económico; 2. Mejorar la eficacia de la administración del Estado en general y de los recursos financieros en particular; 3. Continuar el esfuerzo desplegado para liberalizar la economía, deshacerse de la participación del Estado en las actividades de producción y promover la iniciativa privada; 4. Preparar un documento estratégico sobre reducción de la pobreza basado en la participación, que sirva de marco general en el Chad. 	<p><u>Educación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adoptar el marco legislativo; - Mejorar la eficacia del gasto en educación; - Introducir nuevas normas sobre el nivel de educación de los maestros y su remuneración y dar la formación necesaria para aplicar las nuevas normas; - Aumentar la parte del gasto en educación atribuido a la enseñanza primaria; reducir la proporción de gastos administrativos en el presupuesto de educación; - Mejorar la enseñanza y las condiciones de aprendizaje; - Aumentar la proporción de recursos presupuestarios y las inversiones en el sector; - Fijar objetivos para la reducción de las relaciones maestro/alumnos y clase/alumnos y aumentar el número de clases; - Mejorar la eficacia en la gestión del sistema educativo mediante su descentralización y reducción de escala; - Renovar los planes de estudio y mejorar su interés para la futura vida profesional; - Aumentar la tasa de alfabetización; la tasa de analfabetismo es de 67% y el 78% de los iletrados son mujeres; - Aumentar la participación de la comunidad.

<p><u>Crecimiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumentar el crecimiento a plazo medio, lo que exigirá un estímulo de las inversiones y un aumento de los recursos internos disponibles para inversión mediante un incremento de la economía pública y la aplicación de políticas encaminadas a movilizar el ahorro privado y exterior; - Obtener asistencia financiera de asociados externos, tanto para financiar una gran parte de la inversión pública como para satisfacer necesidades de financiación excepcionales. 	<p><u>Salud:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Completar la cobertura sanitaria proporcionando gradualmente a todos los distritos unos servicios funcionales; - Consolidar los objetivos de salud maternoinfantil; - Reforzar la capacidad institucional; - Adiestrar personal; - Suministrar medicamentos y mejorar la política farmacéutica nacional; - Aumentar la participación de las comunidades locales en las operaciones del servicio de salud; - Hallar mecanismos para la subcontratación de los servicios con las organizaciones no gubernamentales con miras a la aplicación de la política de salud; - Intensificar la lucha contra las epidemias y contra el SIDA; - Mejorar la información, la educación y la comunicación.
<p><u>Política fiscal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reforzar la programación fiscal para orientarla hacia los objetivos de reducción de la pobreza y mejorar la administración fiscal y aduanera y los procedimientos y la gestión del gasto público; - La introducción de una nueva nomenclatura presupuestaria y contable, el reforzamiento del marco de gasto público y macroeconómico y la consolidación gradual de la gestión de los recursos públicos traerán consigo unas políticas sociales, económicas y financieras más coherentes. 	<p><u>Agricultura y desarrollo rural:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumentar la producción; - Favorecer la aparición de sectores de actividad competitivos; - Mejorar la seguridad alimentaria aumentando la producción; - Promover el sector rural mediante la adaptación y la iniciación de programas de formación en técnicas de pesca, ganadería y agricultura, y mediante el reforzamiento de las organizaciones de productores y la transferencia de las funciones de gestión;

	<ul style="list-style-type: none"> - Concebir un programa de acción encaminado específicamente a la potenciación de la mujer y del niño en las zonas rurales.
<p><u>Política tributaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aumentar la disponibilidad de recursos para el desarrollo mediante una ampliación de la base impositiva gracias a una reducción de la evasión y del fraude fiscales; - Mejorar la imposición del sector no estructurado; - Reemplazar el impuesto sobre la cifra de negocios por un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de tipo único a comienzos del año 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales; - Mejorar la eficacia de la intervención del sector público y de los servicios públicos iniciando un programa para reforzar la capacidad de concebir y supervisar las estrategias y políticas de desarrollo rural; - Efectuar las reformas necesarias para liberalizar el sector del algodón.
<p><u>Política monetaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguir persiguiendo la reducción de la tasa de inflación; - Consolidar la posición financiera del Chad en el Banco de los Estados del África Central; - Proseguir la rehabilitación del sector financiero y bancario; - Aumentar la utilización de instrumentos de política monetaria indirecta y de tipos de interés basados en el mercado para reducir el coste de la intermediación financiera; - Seguir limitando el recurso al crédito bancario interno. 	<p><u>Protección del medio ambiente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Desplegar actividades para combatir la desertificación; - Adoptar un plan de acción que comprenda la plantación de árboles, la lucha contra la erosión y la gestión de la fertilidad del suelo; - Reforzar el marco normativo y la capacidad nacional para la gestión del medio ambiente; - Publicar el reglamento de aplicación de la Ley marco sobre el medio ambiente y de la Ley por la que se establece el Código sobre el agua; - Formar expertos nacionales en medio ambiente; - Empezar y publicar una evaluación participativa de la situación del medio ambiente; - Adoptar un plan nacional para la protección del medio ambiente.

<p><u>Gasto presupuestario:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Atribuir mejor los recursos presupuestarios a los sectores prioritarios con objeto de combatir la pobreza; - Simplificar y racionalizar el gasto público para mejorar su eficacia, reforzar los procedimientos de auditoría y control de la gestión, así como la transparencia y la información pública sobre la ejecución del presupuesto. 	
<p><u>Reformas estructurales y promoción del sector privado:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Promover el sector privado; - Reforzar la gestión económica y administrativa; - Completar el programa estatal de desinversión en las actividades comerciales; - Consolidar el sector financiero, en particular la rehabilitación de los bancos comerciales y la promoción de las instituciones de microcrédito, sobre todo en las zonas rurales; - Reformar el sistema judicial y el marco normativo para ofrecer una seguridad mayor a los agentes económicos; - Establecer una coordinación de todos los aspectos de la política económica entre los sectores público y privado; - Desplegar un esfuerzo especial para mantener y ampliar la red de carreteras. 	<p><u>Desarrollo urbano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el acceso a una vivienda adecuada, segura y salubre; - Simplificar los procedimientos administrativos; - Promover el empleo en las zonas urbanas; - Mejorar los servicios proporcionados al sector agrícola en las zonas urbanas; - Revitalizar las infraestructuras sociales y comunitarias; - Ofrecer facilidades al mercado o mejorar las ya existentes; - Concebir planes de ordenación urbana y urbanismo; - Mejorar la ordenación territorial de las zonas urbanas; - Reforzar la legislación sobre tenencia de tierras; - Aumentar los recursos de las administraciones locales; - Proteger o apoyar a los grupos vulnerables;

	<ul style="list-style-type: none">- Incitar a las organizaciones no gubernamentales y a las asociaciones urbanas a que movilicen a la población para obtener su participación;- Establecer un marco para la prevención de las catástrofes naturales.
<p><u>Gestión económica y administrativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Concebir un amplio programa de creación de instituciones y aumento de la capacidad, con objeto de mejorar la eficacia de la administración mediante una reducción del personal y la simplificación de las funciones;- Controlar la masa salarial, en particular mediante la sustitución del sistema de ascenso automático por un sistema basado en el mérito;- Descentralizar la administración.	<p><u>Gestión y alivio de la deuda:</u></p> <p>Tema no examinado</p>

Proceso de consulta

Con objeto de concebir un proceso transparente y participativo de preparación del documento estratégico sobre reducción de la pobreza, se han previsto tres fases:

1. Una evaluación, encaminada a reunir y mejorar la información sobre la pobreza y su dinámica, que permita efectuar un diagnóstico;
2. Identificación de criterios para abordar desde el punto de vista estratégico las actividades prioritarias;
3. Puesta en práctica, sobre una amplia base, de la estrategia nacional de reducción de la pobreza.

Para dirigir el proceso se ha elegido un comité director compuesto de todos los interesados: representantes del Parlamento, de la Administración Pública, de la sociedad civil y del sector privado. El Comité se reúne con periodicidad mensual. Se han organizado en todas las regiones del Chad consultas participativas, dirigidas por un alto funcionario del Estado y un representante de la sociedad civil, con objeto de obtener la intervención de la máxima variedad posible de grupos y regiones. Se toman medidas especiales para cerciorarse de que en los grupos consultivos participan los más pobres de los pobres.

En noviembre de 2000 tuvo lugar un foro especial de la sociedad civil y en el último trimestre del mismo año se efectuó la evaluación de un programa modelo. Se ha organizado un seminario nacional para identificar los métodos estratégicos y las actividades prioritarias, que se celebrará del 15 al 22 de febrero de 2001. A continuación se procederá a la preparación del proyecto de estrategia nacional de reducción de la pobreza, que estará terminada en marzo. En abril se reunirán seminarios regionales para examinar el proyecto y en los meses de abril y mayo de 2001 comenzará la fase de planificación estratégica, seguida en mayo y junio por una validación del proceso de preparación de los documentos estratégicos sobre reducción de la pobreza, en el que se recogerá la información recibida de las autoridades políticas. La estrategia nacional de reducción de la pobreza y los documentos estratégicos correspondientes estarán terminados a más tardar el 30 de junio de 2001.

MOZAMBIQUE	
<u>Elementos fundamentales</u>	
<p><u>Objetivo nacional:</u> mejorar el nivel de vida de la población (reducción de la pobreza)</p> <p>El documento estratégico sobre reducción de la pobreza tiene cinco objetivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales; 2. Invertir en capital humano; 3. Mejorar las redes de seguridad social; 4. Formular una política demográfica; 5. Mejorar la capacidad nacional de análisis y vigilancia de la pobreza. 	
<u>Política macroeconómica</u>	<u>Política social</u>
<p>- Mantener un rápido crecimiento económico estimulando el desarrollo de la industria y la construcción y mejorando la productividad agrícola.</p>	<p><u>Pobreza:</u> incapacidad de la persona para obtener para sí misma y para las personas que dependen de ella una serie de condiciones básicas mínimas de subsistencia:</p>
<p>Las perspectivas de crecimiento tienen un <u>objetivo rural y regional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la productividad agrícola en el sector familiar; - Crear una red de comercialización capaz de ofrecer los insumos productivos necesarios y de garantizar la adquisición de los excedentes agrícolas; - Crear un sistema financiero rural para apoyar las actividades de producción y comercialización de las empresas agrícolas y comerciales medianas y pequeñas; - Estimular la comercialización y la competencia mediante el acceso al capital. 	<ul style="list-style-type: none"> - Las condiciones básicas mínimas se han determinado mediante un umbral de pobreza absoluta establecido a partir de un nivel de nutrición de aproximadamente 2.150 kilocalorías diarias por persona; - La incidencia de pobreza absoluta es de 69,4%; - Tres de cada cuatro mujeres de Mozambique no saben leer ni escribir; - La mayoría de la población no tiene acceso al agua potable; - Las tasas de mortalidad materno-infantil siguen siendo elevadas. <p>El objetivo consiste en reducir la pobreza del 70% actual al 50% aproximadamente en los próximos 10 años.</p>

<ul style="list-style-type: none"> - La política económica se ha centrado durante los últimos años en la estabilización. - Mozambique progresa hacia un ajuste estructural y se concentra en la reducción del desequilibrio macroeconómico. 	<ul style="list-style-type: none"> - El objetivo consiste en ampliar el capital humano mediante la inversión en educación, salud, empleo, acceso a un agua potable y saneamiento.
<ul style="list-style-type: none"> - La lucha contra la pobreza supone la dedicación de recursos presupuestarios escasos a actividades que contribuyen a un crecimiento económico sostenido y a una mejor distribución de los recursos dentro de la economía; - La estabilidad económica es un factor importantísimo si se debe a que el activo de los pobres no se deteriore. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se da prioridad a las familias compuestas de un gran número de miembros, que disponen de una sola fuente de ingresos, cuyo cabeza de familia es una mujer, cuyo <u>machamba</u> (huerto) medio tiene una superficie menor de lo normal y cuyo cabeza de familia carece de una fuente permanente de ingresos.
<p><u>Liberalización del comercio internacional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fomentar el acceso al mercado de nuevas empresas reduciendo la burocracia necesaria para la obtención de una licencia; - Reformar la política fiscal; - Mejorar el sistema aduanero; - Mejorar la infraestructura básica; - Mantener el orden, la ley, la justicia y la seguridad interna. 	<p><u>Educación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantizar el acceso de todos los niños a la enseñanza primaria; - Reducir el analfabetismo en los adultos; - Aumentar la tasa de escolarización de las niñas; - Contratar personal docente debidamente calificado; - Construir nuevas aulas; - Proporcionar gratuitamente material escolar y uniformes; - Instar a las empresas y a las organizaciones no gubernamentales a que organicen programas de alfabetización para sus trabajadores y para las comunidades circundantes.
<ul style="list-style-type: none"> - Mantener baja la inflación y estabilizar el mercado de divisas. - Favorecer el crecimiento de las industrias fundamentales. 	<p><u>Salud:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar la atención primaria de salud y el acceso que a ella tienen las mujeres y los niños;

	<ul style="list-style-type: none"> - Prevenir las principales enfermedades endémicas; - Prevenir el VIH/SIDA; - Mejorar la nutrición, principalmente mediante la instrucción en hábitos de nutrición sanos; - Promover la planificación familiar.
	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentar la cobertura de la asistencia institucional al 50%; - Cerciorarse de que el 75% de los niños nacidos en los próximos diez años estarán enteramente vacunados antes de haber cumplido un año de edad; - Mejorar el tratamiento de las complicaciones del aborto; - Obtener la participación de 1.200 toxicómanos en programas de rehabilitación.
	<p><u>Agua potable:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el acceso a un agua potable (el 50% de la población urbana y el 40% de la población rural)
<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el sistema bancario y postal para facilitar las comunicaciones y la transferencia de remesas. 	<p><u>Saneamiento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar el acceso al saneamiento; - Aumentar al 50% la cobertura con medios de saneamiento de bajo coste en las zonas urbanas.
<p><u>Intensificar el análisis de la pobreza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizar el contexto macroeconómico en el que se produce la estabilización y en el que se proyecta un crecimiento económico sostenido; 	<p><u>Agricultura:</u></p> <p>El objetivo consiste en aumentar la productividad agrícola en el sector familiar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fomentando la utilización de semillas mejoradas, servicios de extensión, abono orgánico, plaguicidas y fertilizantes;

<ul style="list-style-type: none"> - Dar formación a diez técnicos nacionales en técnicas de análisis y evaluación de la pobreza; - Incluir seminarios sobre análisis de la pobreza en los planes de estudio universitarios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aumentando la proporción de los habitantes que tienen acceso a servicios de extensión agrícola del 17,5 al 27%; - Fomentando la creación de pequeños sistemas de riego; - Mejorando el acceso a la tierra, a los mercados y a los servicios financieros; - Promoviendo las asociaciones de campesinos; - Aprovechando los excedentes mediante la promoción de la transformación y la conservación de los principales productos agrícolas locales.
	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar las técnicas de pesca; - Promover la zootecnia como fuente de seguridad alimentaria y de ingresos, fomentando el consumo de carne, leche y huevos y la creación de programas de ganadería y regeneración.
	<p><u>Infraestructura y desarrollo rurales:</u></p> <p>La participación de la comunidad, la coordinación intersectorial y la descentralización son los elementos fundamentales básicos del desarrollo rural.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mejorar las carreteras, la vivienda y el acceso a los servicios de energía en las zonas rurales; - Desenclavar las zonas rurales; - Establecer condiciones favorables para el comercio de bienes y servicios, reducir el coste de las transacciones y velar por que haya unos servicios financieros suficientes; - Garantizar servicios financieros adecuados para 100.000 clientes;

	<ul style="list-style-type: none">- Descentralizar y potenciar las administraciones provinciales;- Promover la comunicación en las zonas rurales mediante el establecimiento de centros deportivos y culturales locales;- Reducir el porcentaje de población que vive en chozas y cabañas.
	<p><u>Empleo:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Promover el empleo y la formación profesional en zonas rurales;- Promover las empresas y los microproyectos generadores de ingresos;- Velar por que cada trabajador disponga de un sistema de seguridad social.
	<p><u>Nutrición:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Distribuir cápsulas de vitamina A a todos los niños menores de 5 años y aumentar su consumo de alimentos ricos en vitaminas;- Distribuir yodo a los niños de edad escolar;- Mejorar la calidad de la dieta en las zonas rurales.
	<p><u>Seguridad alimentaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Lograr que todos tengan acceso físico y económico a una alimentación suficiente para llevar una vida activa y sana.- Conseguir una mayor estabilidad en los recursos familiares mediante:<ol style="list-style-type: none">1. Un aumento de la producción;2. La diversificación de los cultivos de subsistencia;

	<p>3. La expansión y la diversificación de las oportunidades de generación de ingresos a través de actividades agrícolas y de otra clase;</p> <ul style="list-style-type: none">- Ofrecer subsidios alimentarios a 54.390 discapacitados.
	<p><u>ETS y VIH/SIDA:</u></p> <p>En 1998, la prevalencia en los adultos era de 14,5%; los principales factores determinantes del VIH/SIDA son la pobreza, el desempleo y los tabúes y las prohibiciones sexuales;</p> <ul style="list-style-type: none">- Actividades prioritarias:<ol style="list-style-type: none">1. Prevenir la infección por medio de la educación sexual;2. Tratamiento de las ETS, asesoramiento y práctica voluntaria de pruebas;3. Aumento de la disponibilidad de preservativos;4. Establecimiento de seis centros de consulta en las principales ciudades;5. Dar asistencia clínica a 30.000 personas que viven con el SIDA y asistencia domiciliaria a otras 9.500.
	<p><u>Familia:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Reforzar la función de la familia en la protección y la habilitación de sus miembros;- Ofrecer rehabilitación social a los delincuentes infantiles y a los niños víctima de prostitución y abuso sexual;- Promover la rehabilitación psicosocial, la educación y la formación profesional de los niños de la calle y de los huérfanos;- Obtener que 7.500 jóvenes participen en las organizaciones de desarrollo.

	<u>Alivio de la deuda</u>
	No se menciona el alivio de la deuda.
<u>Proceso de consulta</u>	
<p>El documento estratégico sobre reducción de la pobreza fue preparado por un grupo intersectorial dirigido por el Ministerio de Planificación y Finanzas con participación del Departamento de Planificación Macroeconómica, los Ministerios de Sanidad, Educación, Trabajo, Acción Social, Agricultura y Pesca, Obras Públicas y Vivienda y los institutos de desarrollo rural y acción social. También participaron miembros de la oficina técnica para la demografía, instituciones académicas y de investigación y el municipio de Matola.</p> <p>Se procedió a consulta con las instituciones gubernamentales, la sociedad civil (asociaciones de productores, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y grupos religiosos) y la comunidad de donantes internacionales durante la elaboración, realización, ejecución y adaptación del programa de desarrollo.</p> <p>El documento estratégico se reprodujo y distribuyó por todo el país. Se difundió también información al respecto por la radio y la televisión y en seminarios organizados en las provincias.</p>	

Annex II

**SUMMARY OF PRSP ANALYSIS: BENIN, GHANA, KENYA,
SENEGAL, TANZANIA, UGANDA AND ZAMBIA**

BENIN	
Key elements	
Strategic approach:	
<ul style="list-style-type: none"> • Enhance the consistency of macroeconomic and sectoral policies and ensure specific targeting at poverty reduction; • Strengthen macroeconomic and financial policies and various measures to promote private investment, as well as give priority to social services by allocating more of the proceeds from growth and external assistance to them and implementing social policies appropriate to local conditions; • Focus on the principal objective of the national plan for combating poverty, adopted in 1998, of achieving a sustainable rate of economic growth that will produce a substantial increase in income per capita by the year 2002. 	
Macroeconomic policy	Social policy
<ul style="list-style-type: none"> • Economic reforms aimed at re-establishing sustainable growth, reducing internal and external imbalances, and improving the standard of living; • Goal of poverty reduction through financial stability and strong and sustainable economic growth; • Goal of real economic growth rate of 5 to 6 per cent by raising the investment ratio and keeping inflation at 3 per cent. 	<p>Current initiatives to combat poverty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • National Programme on the Social Dimension of Development Strategy; • National Community Development Programme; • Local development support programmes; • National Employment Programme; • Adopted the Social Dimension of Development (SSD) in 1994 to address all aspects of poverty simultaneously by ensuring that macroeconomic and sectoral policies explicitly integrate the SDD; • Plan targeting the most vulnerable groups, with their full participation. Aim of addressing the causes of poverty through monitoring of the population's living conditions.
<p>Budgetary policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overall development strategy based on budgetary policy; • Goal of increasing budgetary revenues through effective tax and customs administration and broadening the tax base; • Ensure that budgetary allocations to the social sectors are consistent with the poverty reduction strategy. 	
<p>Privatization:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Policy of withdrawal from productive activities (in particular telecommunications, energy and cotton). 	<ul style="list-style-type: none"> • Improve social services by reforming the civil service and quickening the pace of decentralization; • Address basic needs identified as priorities by the beneficiaries themselves.

<ul style="list-style-type: none"> • Enhance the efficiency of the public sector, expand the role of the private sector, and stimulate private investment in diversifying monetary policy through: <ol style="list-style-type: none"> 1. Active involvement in regional integration and WAEMU activities; 2. Acceleration of structural and sectoral reforms. 	<ul style="list-style-type: none"> • Public participation is essential for poverty-reducing development; • Local governments will play a predominant role in executing and monitoring anti-poverty programmes.
<p>Tax policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goal of promoting greater equity in income distribution. 	<p>Poverty: five essential areas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Education; 2. Access to primary health services and care; 3. Food security; 4. Development of income-generating capacity; 5. Economic integration.
<p>Price stability:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use interest rates as the principal instrument for price regulation; • Maintain the parity of the CFA franc against the euro. 	<p>Health:</p> <p>Limited access to health-care services, with Benin falling short of WHO standards;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goal of establishing 23 additional health districts; • Prepare a strategy to combat the HIV/AIDS epidemic; • Pursue efforts to reduce malnutrition.
<ul style="list-style-type: none"> • Liberalize the economy by deregulating prices and opening new sectors to competition and private investment; • Continue diversifying the economy, through private investment in the agricultural and manufacturing sectors. 	<p>Education:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Make education broadly available by: <ol style="list-style-type: none"> 1. Eliminating tuition fees for rural students; 2. Transferring central government resources to rural schools; 3. Eliminating the grade repetition system in the first year of primary school; 4. Recruiting teachers to fill vacant posts.
<p>Sectoral reform of agriculture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promotion of the diversification of national output by developing pineapple, cassava, cashew, palm oil and groundnut production; • Increase farmers' incomes to reduce poverty: supporting producer prices are an important part of the poverty reduction strategy. 	<p>Water:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accelerate rural and urban water supply programmes; • Introduce a pricing policy for water use; • Pursue public awareness campaigns on the interactions between water, hygiene and health.
<p>Debt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce the external debt burden and maintain a prudent debt policy. 	<p>Rural development:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Local financing for agriculture; • Improve food security; • Extend the road system.

	<p>Environment and sanitation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increased planning of urban development and access to low-cost housing; • Goals: <ol style="list-style-type: none"> 1. Improving living conditions; 2. Monitoring trends in natural resources and biodiversity; 3. Promoting urban sanitation; 4. Reducing pollution.
	<p>Debt relief:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exactly how debt relief will be used is barely touched upon, except to say that priority will be given to social services when allocating external assistance.
<p>Consultation process</p>	
<p>It is necessary for the population to take responsibility for development policy. The people themselves must be involved throughout the process, from the conception of projects and programmes, through their planning and financial arrangements, to their execution and evaluation. At the national level, the Government will involve target groups, civil society, the private sector and NGOs.</p> <p>To prepare the PRSP, the Government established the National Development Anti-Poverty Commission, whose membership is comprised of the public administration, specialized agencies, development partners and representatives of civil society, including NGOs. Participation will be managed through the Commission.</p> <p>At the local level, local development associations, authorities and municipal associations for the environment will constitute the basic support for the participatory process. This process will include education programmes and household surveys of living conditions. Consultations will involve representatives of local government and decentralized State agencies, civil society and development partners.</p> <p>At the central level, consultations with issue-specific groups will be used on an ad hoc basis. Technical meetings will address the macroeconomic framework, as well as economics and social policies, and will involve the appropriate external partners.</p>	

GHANA	
Key elements	
<p>The overall trend in poverty during the 1990s has been broadly favourable in Ghana, with the percentage of poor falling from 51 per cent in 1991/92 to about 43 per cent in 1998/99. The decline however, is not evenly distributed geographically, with substantially higher levels of poverty in rural areas.</p> <p>Ghana's development policy over the past 10 years has prioritized reducing poverty by improving agriculture. Developed in 1995, Ghana's strategy for poverty reduction lays emphasis on: economic growth, integrated rural development, expansion of employment opportunities, improved access by the rural and urban poor to basic public services such as education, health care, water and sanitation, and family planning services. Principal objectives are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A reduction in the incidence of poverty in both rural and urban areas; • Strengthened capabilities of the poor and vulnerable to earn income; • Reduced gender and geographical and socio-economic disparities; • A healthier, better educated and more productive population. <p>Ghana is at present embarking on preparations for its second policy framework and medium-term plan for the period 2001-2005, a constitutional requirement every five years and part of Ghana's vision statement, "Ghana 20/20".</p>	
Macroeconomic policy	Social policy
<ul style="list-style-type: none"> • Growth-oriented macroeconomic strategy, based on promoting the productive sector and encouraging private investment (4 per cent in 2000, 4.5 per cent in 2001, 5.5 per cent in 2002); • Maintaining budget resources for sustainable revenue to GDP ratio provision of public services; • Poverty reduction through expenditure reprioritization, (medium-term expenditure framework), decentralization, better targeting of poverty regions; • Raising labour productivity through diverting money saved from cuts in interest payments to social sector expenditure. 	<ul style="list-style-type: none"> • Basic education, primary health care, rural water, housing and infrastructure, poverty-focused agriculture, social welfare and population management; • Establishment of food security systems and improved access markets and better infrastructure; • Reducing population growth and improvement of nutrition; • Increased support to judicial, legal and human rights; • Reducing isolation of poor communities through strengthening economic infrastructure such as roads and communications networks.

<p>Privatization and employment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creating an enabling environment for private sector growth; removing bottlenecks; • Growth in the productive sectors to create employment; • Construction of economic infrastructure; • Accelerated privatization programme and creation of Privatization Trust to ensure ordinary Ghanaians have meaningful stake in privatized companies; • Creation of National Economic Forum and Public-Private Sector Forum; • Creation of appropriate regulatory frameworks. 	<p>Education:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increased support to basic education, supply of materials, number of teachers and teacher trainings; • Ensure equal access to basic education to raise human capital levels of the poor; • Increase girls' primary school enrolment, from 82.4 per cent in 1999 to 93 per cent in 2003; boys' from 85.5 per cent to 93 per cent; • Implement strategic functional literacy programme; • Target deprived areas for infrastructure development, teacher housing, etc.
<p>Trade and export promotion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liberalizing economy (key to higher growth and employment) and lowering of trade protections in line with regional liberalization; • Export promotion and diversification. 	<p>Health:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increase health expenditure as a percentage of domestic primary expenditure; • Develop/implement multi-sector HIV/AIDS strategy; • Coverage of, and access to, primary health care.
<p>Tax policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pursue equity by replacing trade-related taxes with broad-based taxes (value and income). 	<p>Water:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improve access to safe water; • Increase access to safe water to 60 per cent of the rural population by 2001, and 83 per cent of the rural population by 2008, and to 100 per cent of the urban population by 2015.
<p>Agriculture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernization of agricultural sector; • Rebuild foreign reserves to reduce vulnerability to external shocks. 	<p>Agriculture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enhancement of agricultural sector by increased investment productivity, investment and access through improved technology and financial services, as well as training.
<p>Monetary policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce inflation; • Stabilize the exchange rate. 	<p>Debt relief/management:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce domestic debt, by maintaining primary balances around 4 per cent (medium term) and accelerating divestiture programme; • Strictly limit external borrowing.

Consultation process

The PRSP will be integrated into the Vision 20/20 process and poverty reduction efforts will generally work through existing institutional mechanisms - the Technical Committee on Poverty of the Inter-Ministerial Committee (IMC) on Poverty Reduction. The National Development Planning Commission - the body also responsible for the second five-year plan of Vision 20/20 - will ensure that a coherent poverty strategy emerges from the consultations.

- The process started in January 2000, with the formation of eight Cross-Sectoral Groups (CSPGs) with broad representation from government, the private sector, academics, civil society and development partners;
- Shortly thereafter, Vision 20/20 was launched and in February the Development Strategy for Poverty Reduction was drafted as the core of an Interim PRSP, and distributed to the CSPGs as background for their thematic work. Presentation of the Interim PRSP took place in July 2000, as well as the launching of the Ghana PRSP process on the basis of Vision 20/20 and the formation of core teams to undertake the preparation of the PRSP. Consultations with civil society and others are to have taken place from August/September 2000;
- The IMC will oversee the preparation of the Ghana PRSP, which will be finalized in February 2001.

The Comprehensive Development Framework and the Comprehensive Country Assessment were also prepared with a broad range of development partners, under the leadership of the Government.

The "Mini-CG" (Consultative Group of Government and its development partners) meets four times per year, reviewing developments and government-donor issues.

KENYA	
Key elements	
<p>Primary development goal: Achieve a broad-based, sustainable improvement in the standards of welfare of all Kenyans. While the Government has a particular responsibility for spearheading action and creating a positive framework, the private sector, non-governmental and community-based organizations all have a vital role to play in meeting the challenge of poverty reduction.</p> <p>The PRSP has five components:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To facilitate sustained and rapid economic growth; 2. To improve governance and security; 3. To increase the ability of the poor to raise their incomes; 4. To improve the quality of life of the poor; 5. To improve equity and participation. 	
Macroeconomic policy	Social policy
<p>Prerequisites for poverty reduction:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Economic growth that considerably outpaces population growth; • Immediate priority of restoring and sustaining rapid economic growth in order to generate the wealth and economic expansion necessary; • Agriculture (food production) and tourism will be the main source of economic growth early on. An upturn in manufacturing, export-oriented agricultural and service sectors is projected to sustain economic growth over the medium term. 	<p>The poor are defined as those who cannot afford basic food and non-food items. The poor must be provided with the means to help themselves through:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Income earning opportunities; • Ready access to means of production; • The provision of affordable, basic services; • Protection of the law. <p>This will not be achieved through temporary relief programmes, but only by increasing equity of opportunity and ensuring that all members of society can participate fully.</p>
<p>Macroeconomic strategy for the next three years:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increase real per capita GDP growth to at least 3 per cent a year on a sustainable basis; • Keep inflation below 5 per cent; • Gradually increase foreign exchange reserves to provide four months of import cover; • Maintain the current account deficit at sustainable levels. 	<p>Methods for achievement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Focus resources on improving the provision of and access to basic social services most needed by the poor: education, health, and water supply; • Seek closer working relationships with NGOs and religious organizations to increase the range and quality of provision.
<p>Reform of the financial sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce interest rates and increase savings rates by consolidating stabilization gains and reducing the domestic debt burden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Each community must become the vehicle for its own development and increased well-being; • Development must be participatory and demand-driven, with accountability to local people rather than central government; • Deliberate shift to increase the functional responsibilities of local authorities.

<p>Private sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Government will assist the private sector in expanding and gaining access to export markets and attracting foreign investment; • The bulk of the investment will come from the private sector, as investor confidence recovers, key privatizations take place and infrastructure priorities are addressed; • This strategy relies on significant privatization proceeds and an increase in foreign financing, which will have to be identified. 	<p>Immediate priorities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increasing primary school enrolment and completion; • Enabling poor children to attend secondary school; • Providing public health-care facilities with adequate drug supplies; • Making drugs and treatment affordable to the poor; • Increasing the provision of potable water in poor areas; enabling communities to assume responsibility for managing and maintaining water supplies; • Privatization of urban water supplies.
<p>Debt reduction:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce the domestic debt by lowering domestic real interest rates and allowing resources to shift to the private sector; • Contain the tax burden to 25 per cent of GDP; • Allow markets to determine interest rates; • Maintain international reserves to cover four months of imports. 	<p>Agriculture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poverty reduction calls for higher agricultural growth rates; • Important to expand rural non-farm employment; • Create an effective agricultural advisory service that provides practical, cost-effective extension; • Promote food security by maintaining a reserve of 3 million bags of maize, as well as drought contingency funding; • Continue famine relief distribution and monitoring by NGOs; • Control farm inputs for quality and empower farmers' associations; • Focus training on women farmers.
<p>Tax Reform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reform the tax and fee system; • Shift the tax burden away from the poor. 	<p>Physical infrastructure: Key to economic growth, employment generation and poverty reduction:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Employ strict and transparent contracting procedures, quality inspection, and prompt auditing and accounting for road maintenance funds; • Sub-contract road maintenance to communities which will use labour-intensive methods and provide employment to local communities;

<p>Foreign trade:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rationalization of the trade regime through reductions in duty rates on raw materials; • Enforce anti-dumping legislation to ensure fair competition for Kenyan products. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attract the private sector to construct, maintain and manage the major highways as toll roads; • Increase the portion of the population with access to electricity and address the power crisis; • Improve telecommunications, air transport, ports, railways and housing; • Rehabilitate historical buildings and monuments.
<p>Land reform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Issue over 300,000 titles to individuals. 	<p>Water:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Withdraw from direct involvement in the implementation and management of water schemes, handing them over to communities and local authorities; • Develop a rehabilitation programme with stakeholders to enhance ownership; • Private sector will finance and manage urban water utilities.
<p>Trade liberalization:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminate all requirements for trade licensing acts which constrain, control and impose costs on business without adding value; • Retain requirements relevant to the sale of firearms, licensing or radio frequencies, etc.; • Eliminate excessive delays at port through port privatization. 	<p>Education:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NGOs and development partners fund the provision of textbooks and teaching materials at the primary level; • Provide science equipment to secondary schools; • Standardize textbooks; • Provide bursaries to cover user charges for poor children; • Provide loans and scholarships to outstanding poor students; • Equitably distribute teachers; • Reduce optional subjects and textbooks; • Decentralize school management to the district, school boards and parents'/teachers' associations; • Increase educational resources targeted to AIDS orphans, child workers and slum dwellers.

<p>Opening of markets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opening of new markets for labour intensive manufacturers, services and agro-products; • Reduction of customs duties on raw materials which are not locally available. 	<p>Health:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drop charges for treatment of certain diseases; • Enforce a waiver system for the very poor; • Shift from curative to preventive services; • Declare AIDS a national disaster; • Expand family planning services and improve information and education.
<p>Tourism:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renewed marketing effort to promote Kenya as an attractive tourist destination; • Improve security for tourists; • Upgrade tourism infrastructure, including roads, telecommunications, power, water and airport facilities; • Diversification of tourism (i.e. wildlife, cruise ships). 	<p>Social security:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Create a safety net for aged, retrenched, unemployed, disabled and displaced persons; • Develop new, innovative approaches for dealing with social safety nets.
<p>Priority sectors for increasing employment and household incomes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coffee, cotton/textiles/garments, tourism, pyrethrum, processed foods, leather and leather products; • Increase production of coffee, tea, sugar, cotton, pyrethrum, horticultural crops, dairy and fish; • Minimize obstacles and constraints to the process of private sector value creation. 	
<p>Combating corruption:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drive against corruption at all levels of the public sector; • New Code of Ethics and a wealth disclosure system for public officers; • Transparency in public procurement and contracting procedures. 	

<p>Privatization:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Removal of government from business and commercial activities; • Adopt a privatization programme, concentrating upon Kenya Railways, Ports Authority and Pipeline Company; • Reduce government control and intervention in the day-to-day running of the sugar factories; • Liberalize, reform and privatize institutions in the financial sector. 	<p>Debt relief: No mention of debt relief.</p>
<p>Consultation process</p>	
<p>The PRSP was developed in broad consultation with various stakeholders. Six Sector Working Groups and a Macroeconomic Working Group were established. This process culminated at the National Stakeholders' Consultative Forum, which brought together over 300 Kenyans from the private sector, government, the media, NGOs, civil society, research institutions and think-tanks. Forum participants acknowledged that the voices of the poor were missing and the consultation process needed to be decentralized to districts and communities.</p> <p>Monitoring and Evaluation Strategy:</p> <p>All public sector programmes will include targets, objectively verifiable indicators and annual output definitions to facilitate monitoring. Poverty monitoring involves a large number of institutions, including the Poverty Eradication Commission and the Central Bureau of Statistics (CBS). CBS will provide data on these poverty analyses. Information for poverty reduction strategy will be drawn from household surveys, participatory poverty assessment surveys and establishment surveys.</p> <p>A stakeholders' committee that includes representatives from the public sector, the private sector, NGOs and religious organizations, donors and representatives of the poor will be formed.</p>	

SENEGAL	
Key elements	
The existing private sector development strategy has not contributed to improving living standards or reducing poverty levels as hoped.	
Macroeconomic policy	Social policy
<p>Economic Growth:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Growth-oriented macroeconomic strategy, based on promoting the productive sector and encouraging private investment; • Goal of maintaining the economy on a higher growth path, by completing structural and sectoral reforms in agriculture, livestock, fisheries, energy, transportation, private sector development and promotion of good governance; • Transfer increasing responsibility to the private sector in order to stimulate broader growth and create jobs; • More active partnership between the State, social and professional groups, and local communities. 	<p>Poverty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aim of reducing the incidence of household poverty by 50 per cent by 2015; • Will be measured and evaluated on the basis of the “energy approach”, taking into account the variables of “food and basic social services”, with the cost of the bundle being approximately 1 dollar purchasing power parity (PPP). <p>Objectives of the strategy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promoting income-generating micro-enterprises; • Increasing cooperation between local government and grass-roots organizations to develop community infrastructure; • Strengthening of capabilities at the grass-roots level.
<ul style="list-style-type: none"> • Reforms in conjunction with West African Economic and Monetary Union (WAEMU) countries to improve revenue generation and ensure strict management of public spending; • Implement WAEMU Common External Tariff in full. 	<p>Demand-oriented approach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solutions to local problems will be more sustainable if target communities are able to participate in designing and implementing the solutions; • Approach will be participatory, focusing on accountability; • Requires communities to become involved in projects and play a meaningful role in the financing of current and capital outlays.
<ul style="list-style-type: none"> • Banks are expected to increase financing for productive investment. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decentralization of government agencies and local government; • Central government will coordinate, facilitate, promote, and supervise the execution of investment projects.

	<p>Education:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increase funding for primary education to raise enrolment rates to 75 per cent; • Improve the enrolment rate for girls; • Priority to have universal school enrolment by 2008, as well as eradication of illiteracy; • Development partners will contribute to funding these efforts.
	<p>Agriculture and food security:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Involve rural people in economic and social infrastructure projects; • Enhance food security through diversified and competitive local production; • Achieve objectives by improving rural infrastructure and making micro-credit available to small producers.
	<p>Health:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensure wider availability of essential drugs, access to health services, improved care, monitoring of endemic diseases and epidemiological surveillance, hospital reform and compliance with staffing standards; • Reduce infant and maternal mortality; • Lower fertility rates with family planning; • Solidify the financial basis for the public health system.
	<p>Gender and development:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alleviate domestic tasks in rural areas by making proper equipment available.
	<p>Employment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goal of achieving full employment; • Reduce unemployment with a programme to promote income-generating activities and slow the rural exodus; • Make credit more available to local products and businesses that employ vulnerable groups.

	<p>Environment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empower local groups in the management of natural resources; • Carry out obligatory environmental impact studies in connection with any project involving land development, civil works, infrastructure or industrial and agricultural installations that pose environmental risks; • Preserve human habitats, particularly in coastal areas and wetlands.
	<p>Rural areas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide access to drinking water through a well drilling programme (the national borehole interconnection programme); • Extend rural electrification and the telephone service; • Develop roads to facilitate trade and communication.
	<p style="text-align: center;">Debt relief</p> <ul style="list-style-type: none"> • No mention of debt relief or any other external assistance.
<p>Consultation process</p>	
<p>Strategy was developed in consultation with all constituencies, including public administration, local communities, civil institutions and development partners.</p> <p>To prepare the final version of the PRSP, the Government will hold broad consultations with all the parties concerned, including focus groups of the private sector, press, unions, women's groups, NGOs and local representatives.</p>	

TANZANIA	
Key elements	
<ul style="list-style-type: none"> • Between 15 million and 18 million Tanzanians, half the population, live below the poverty line of \$0.65 a day. The infant mortality rate is 86 per 1,000, while life expectancy is around 49 years. Malnutrition affects 44 per cent of children and access to safe water is around 50 per cent. The adult illiteracy rate is 28 per cent and the net primary school enrolment rate is about 57 per cent. • Poverty eradication will be pursued through higher growth, improved economic opportunities for the poor, building human capital and empowering the poor to participate in development strategy. 	
Macroeconomic policy	Social policy
<ul style="list-style-type: none"> • Goal of achieving an economic growth rate of 6 per cent per year by maintaining gains in macroeconomic stability. • Avoid net domestic financing of the budget and follow monetary policies aimed at reducing inflation below 5 per cent per year. 	<p>Poverty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remains predominantly a rural phenomenon, though the number of poor in urban areas is growing fast; • The poor typically lack capital and human assets, are less educated, suffer ill health and have large families; • Envision society without abject poverty and improved social conditions.
<ul style="list-style-type: none"> • Maintain international reserves at four months of imports of goods and non-factor services. 	<p>Education:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conduct 50 per cent of district-based school mapping by the end of 2000.
<ul style="list-style-type: none"> • Improve accountability in financial management. 	<p>Health:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raise the coverage of children under two years immunized against measles and DPT from 71 to 75 per cent; • Combat the denial of the HIV/AIDS pandemic through national awareness campaigns covering 75 per cent of all districts.
<p>Foreign investment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enhance private investment and lower the cost of doing business; • Allow foreign investors to acquire equities in the stock market. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Continuance of a market dominated exchange rate, with interventions by the Bank of Tanzania to smooth seasonal fluctuation. 	
Tax reform:	Debt relief
<ul style="list-style-type: none"> • Rationalize local taxes and fees and institute central government control mechanisms; • Apply VAT to petroleum products at standard rate; • Repeal NGO exemptions from VAT, except with respect to health, education and water projects; • Limit taxes and levies to import duty, product-specific excises, the Energy Fund and the Road Fund. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seven countries have donated to the Multilateral Debt Fund since its establishment in July 1998; • Provides assistance in servicing debt to the World Bank, IMF and the African Development Bank.

<ul style="list-style-type: none">• Allow use of land as collateral for commercial bank lending.	<ul style="list-style-type: none">• Savings of government resources will be used to provide services to priority sectors, permitting an increase in expenditures.
<ul style="list-style-type: none">• Privatize assets of Dar es Salaam Water and Sewerage Authority and Tanzania Electric Supply Company.	<ul style="list-style-type: none">• Plan to develop a Tanzania Assistance Strategy to guide external aid to Tanzania.
Consultation process	
<p>Committee of Ministers and the Governor of the Bank of Tanzania has been established to steer the preparation of the PRSP.</p> <p>Technical committee established in the Ministry of Finance to assist Committee of Ministers. Responsible for laying the PRSP groundwork, the committee will coordinate consultations with stakeholders such as the donor community, non-governmental organizations, the business community and academics.</p>	

UGANDA	
Key elements	
<p>Poverty has been falling over the past decade in Uganda. The proportion of Ugandans in consumption poverty fell from 56 per cent in 1992 to 44 per cent in 1997. The Government cites the increase in world coffee prices as a major reason for this.</p> <p>Uganda's long-term goals are set out in "Vision 2025". The Poverty Eradication Action Plan (PEAP), developed in 1997, provides national priorities for poverty reduction and guides sector policies. The PEAP is at present being revised and will constitute the Comprehensive Development Framework, as well as the Poverty Reduction Strategy Paper. The PEAP rests on four pillars:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Creating a framework for economic growth and transformation; 2. Ensuring good governance and security (decentralization, transparency and efficiency of public expenditure, improving information access and dissemination, disaster management and conflict resolution); 3. Directly increasing the ability of the poor to raise their incomes; 4. Directly increasing the quality of the life of the poor. <p>The PEAP places emphasis on eradicating income poverty, increasing income to poor households, equitably and efficiently collecting and using public resources, improving literacy and educational achievement, health and ensuring the poor have an effective voice in the design and implementation of public policy.</p>	
Macroeconomic policy	Social policy
<p>Creating a framework for economic growth and transformation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustain economic growth (7 per cent) by creating a framework through which the private sector can expand; • Improve, in particular, agricultural growth rates; • 5 per cent inflation target; • Market-determined exchange rate. 	<p>Actions to aid the poor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improve rural roads and transport (district roads fully repaired and maintained by 2006); • Land: implementation of structures in Land Act; • Restock livestock; • Expand rural and urban markets; • Improve rural electrification (12 per cent rural electrification by 2010); • Vocational education (850 polytechnics and 100,000 persons trained by 2003).

<p>Macroeconomic incentives:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Economic openness, encouraging exports and labour-intensive investments; • Low tariffs; • Open competition in a market being expanded by rising incomes from agricultural modernization. 	<ul style="list-style-type: none"> • Expand micro and small-scale enterprises; • Administrative and political reforms aimed at increasing poor people's control over their own lives and the policies and services which affect them; • Equalization grants to ensure more equal delivery of services across the country.
<p>Structural reforms:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aimed at removing key constraints to private sector growth, and to improve the efficiency and quality of public services; • Banking and financial system; • Public utilities and transport infrastructure. 	<p>Education:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintain universal enrolment of 100 per cent (including poor households); • Encourage children to remain in school; reduce drop-out rates and raise completion rates; • Raise cognitive skills of primary school graduates (as reflected in results of the National Assessment of Progress in Education); • Access to districts levelled and access for lower socio-economic groups increased; • 85 per cent adult literacy after five-year programme; • Maintaining quantity of enrolment increases, while enhancing quality.
<p>Tax reform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continue to make taxes more progressive; • Review of local taxation. 	<p>Water and sanitation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 per cent or maximum feasible access to safe water by 2015.
<p>Employment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expand employment; • Increase non-farm employment in rural areas where most poor people live. 	<p>Health:</p> <p>By 2004/2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduce child mortality from 147 to 103 per 1,000, maternal mortality from 506 to 354 per 100,000; • Reduce AIDS by 35 per cent; • Reduce total fertility rate to 5.4 per cent; • Reduce stunting to 28 per cent.

<p>Financial and regulatory sector:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strengthening of financial sector; • Develop a commercial justice reform programme in order to improve the ability of the Government to enforce contracts. 	<p>Agriculture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernization of agriculture, by: • Research and technology; • Advisory services; • Education for agriculture; • Access to rural finance; • Access to markets; <p>Sustainable natural resource utilization and management.</p>
<p>Private sector competitiveness:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remove constraints on private sector competitiveness; • Improve infrastructure; • Reduce power shortages. 	<p>Infrastructure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improvement of feeder roads via labour-intensive methods of road-building which are cheaper and increase employment.
	<p>Debt relief/management</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Debt relief made available under enhanced HIPC will go towards the Poverty Action Fund.
<p>Consultation process</p>	
<p>Uganda's PRSP will build upon the PEAP, which emerged in 1997 following a national consultative process involving a cross-section of stakeholders (central and local government, civil society and the private sector). Moreover, the current process of revising the PEAP remains a highly participatory process. An initial "discussion draft" was circulated to a wide range of stakeholders and a Participatory Action Plan has been developed which includes consultation at all levels of government, donors, Parliamentarians and civil society. Participatory approaches have increasingly been adopted for sector plan preparation and monitoring and appraisal exercises.</p> <p>A Poverty Status Report (PSR) is produced on a semi-annual basis to review the implementation of the PEAP. The 1999 PSR incorporates data from the recent Uganda Participatory Poverty Assessment Project (UPPAP), which directly consulted poor communities on their priorities, needs and perceptions of the quality of service delivery and government policies.</p> <p>Budgetary process: For the first time, civil society is involved in the dialogue on priorities and spending commitments, as well as monitoring of expenditures. To better reflect district poverty priorities and to bring local governments into the medium-term expenditure process, local government officials prepare medium-term expenditure plans. A transparent budget process with multiple channels for accountability (local constituencies, local authorities, press, community groups, NGOs and donors) is being developed. Civil society meets quarterly with central government officials to discuss delivery against budget allocations.</p>	

ZAMBIA	
Key elements	
<p>In May 1998, a National Poverty Reduction Strategic Framework (NPRSF) was created with the following strategies aimed at addressing both causes and manifestations of poverty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achieving broad-based economic growth through agriculture and rural development; • Providing public physical infrastructure; • Increasing productivity of urban micro enterprises and the informal sector; • Developing human resources; • Coordinating, monitoring and evaluating poverty reduction programmes and activities. <p>The NPRSF and its corresponding National Poverty Reduction Action Plan (NPRAP), prepared after extensive consultations with numerous stakeholders, will serve as the basis and reference point for the preparation of the PRSP.</p>	
Macroeconomic policy	Social policy
<p>Monetary policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improve effectiveness of monetary policy; • Reduce reliance on reserve and liquid asset requirements for domestic credit control; • Make more active use of open market operations, e.g. through the purchase and sale of treasury bills. 	<p>Cross-cutting priorities:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HIV/AIDS; • Environmental management; • Human rights; • Promote gender equity and the role of women in economic development; • Allocate at least 36 per cent of domestic spending (excluding debt service) to the social sector.
<p>Trade policy and export promotion:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimulate non-mining exports; • Reduce/eliminate barriers to imports and continue to rationalize tariff structure; • No new import duty exemptions; • Reduce maximum import tariff rate to 20 per cent; • Build capacity in government for handling non-tradable barriers by trading partners and for imposition of countervailing duty (by 2002); • Finalize establishment of Export Processing Zone. 	<p>Targeted group interventions:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide safety net for unemployed persons including retrenched; • Targeted food security, health and nutrition interventions to areas with high poverty levels; • Implement land resettlement initiatives for displaced workers; • Provide infrastructure support for disabled persons.

<p>Tax policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Broaden tax base to and raise revenue-GDP ratio (excluding grants and privatization receipts) by 1.5 per cent of GDP over the period 1999-2001; • Improve tax administration by rehabilitating border stations, enhancing cooperation with neighbouring countries and improving computer systems; • Review structure of corporate income tax rates with a view to its unification; • Improve compliance with direct tax rules; • Improve non-tax revenue; • Improve collection of debt service from parastatals and privatized companies; • Put in place an effective administrative system to collect road and land taxes. 	<p>Education and human resource development: Towards the goal of providing universal education by 2005, implementation of the Basic Education Sub Sector Investment Programme (BESSIP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • School gross enrolment to reach 100 per cent from current 84 per cent by 2005; • Aim to achieve scores in ongoing national assessment that show improvement over scores in preceding assessments; • Increase access to basic education and improve supply of educational equipment and materials; • Increase access to skills development and vocational training; • Improve health and nutrition of school pupils.
<p>Fiscal management:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improve budget control and cash management; • Eliminate domestic payment arrears and avoid accumulation of new arrears. 	<p>Health:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provide essential and cost effective primary health-care services.
<p>Exchange rate policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintain efficient allocation of foreign exchange and competitive tradable goods sector; • Maintain competitive, unified, market-based exchange mechanism. 	<p>Economic community empowerment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agricultural Sector Investment Programme (developing infrastructure for the development of small-scale farmers); • Environmental Support Programme (aimed at supporting sustainable community-based projects).
<p>Financial market development:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increase variety of financial investment and improve savings allocation. 	<p>Water and sanitation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Increase access to clean and safe water and sanitation in rural areas.
<p>Financial system supervision:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improve prudential oversight and supervision. 	<p>Urban development:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Improve and legalize unplanned peri-urban settlements; • Rehabilitate urban water supply and management; • Increase access to adequate housing in urban areas.

<p>Privatization:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continue to implement accelerated Privatization Programme, particularly in the non-mining sectors; • Add utilities, transport companies and financial institutions to the portfolio of the Zambia Privatization Programme; • Discontinue direct government involvement in retail credit operations, and privatize State-owned enterprises. 	<p>Management:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Build capacity for improved social service delivery; • Improve institutional capacity for effective planning, monitoring and evaluation; • Improve logistical and information systems to support effective decision-making; • Build district capacity to manage education and health services; • Accelerate issuance of title deeds to land and housing.
	<p>Debt relief/management</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Zambia needs urgent debt relief, given the huge amounts of debt falling due in coming few years, in particular because of the HIV/AIDS crisis; <p>Reduce external debt burden by:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remaining current on external debt service obligations; • Seek further concessional rescheduling with Paris Club and rescheduling of non-Paris Club/private sector debt on comparable terms; • Abstain from medium- and long-term borrowing on non-concessional terms; • Reach HIPC decision point (2000); • Reach HIPC completion point (2002).
<p>Consultation process</p>	
<p>The Government plans to present the full PRSP to the Bretton Woods Institutions in June 2001, in line with their new requirement for concessional lending. Given the urgent need for debt relief and consequent urgent need to prepare the Interim PRSP, the consultation for the Interim PRSP was limited to government institutions. However, the NPRAP, which heavily informed this I-PRSP, evolved through a consultative process. Furthermore, the Government intends to hold a stakeholders' seminar to inform on status and to engage stakeholder input into the planning for the PRSP.</p> <p>Various committees have been set up to manage the PRSP process. Technical preparations have been considered and key tasks for preparing the PRSP outlined. Mechanisms to encourage participation, particularly in the rural areas, are being developed. Following a nationwide consultative process, the technical working group will draft the initial PRSP. A national workshop will follow, where delegates from rural and urban areas will participate in discussing the draft. Following approval by the Cabinet, the document will be presented to the IMF and World Bank. The Government will encourage public interest in monitoring the delivery of poverty reduction actions at the national and community levels.</p>	